

**INE/CG205/2019**

**RESOLUCIÓN DEL CONSEJO GENERAL DEL INSTITUTO NACIONAL ELECTORAL RESPECTO DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR DE QUEJA EN MATERIA DE FISCALIZACIÓN, INSTAURADO EN CONTRA DEL PARTIDO MORENA, IDENTIFICADO CON EL NÚMERO DE EXPEDIENTE INE/Q-COF-UTF/37/2017**

Ciudad de México, 10 de abril de dos mil diecinueve.

**VISTO** para resolver el expediente **INE/Q-COF-UTF/37/2017**, integrado por hechos que se considera constituyen infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos derivados del financiamiento de los partidos políticos.

**ANTECEDENTES**

**I. Escrito de queja.** El trece de marzo de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio INE-UT/2126/2017, suscrito por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral de la Secretaría Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, mediante el cual remitió copia certificada del escrito de queja presentada por el Representante Suplente del Partido Revolucionario Institucional ante el Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en contra de Morena, denunciando hechos que considera podrían constituir infracciones a la normatividad electoral en materia de origen y aplicación de los recursos de los partidos políticos. (Fojas 1-41 del expediente)

**II. Hechos denunciados y elementos probatorios.** De conformidad con el artículo 42, numeral 1, fracción II, incisos b) y c) del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, se transcriben los hechos denunciados y se listan los elementos probatorios ofrecidos y aportados por el quejoso en su escrito presentado.

“(…)

*"1. El 21 de febrero de este año, la prensa nacional<sup>1</sup> reportó que Andrés Manuel López Obrador, dirigente nacional de MORENA, iniciaría una gira de tres días en el estado de Veracruz.*

*2. El 22 de febrero siguiente, a las doce horas con cuarenta minutos, Miguel Ángel Yunes Linares, Gobernador del Estado de Veracruz, publicó un video en la cuenta @Yoconyunes de la red social twitter, en el que señaló, entre otras cuestiones, que Andrés Manuel López Obrador era corrupto porque él y MORENA, recibieron recursos del Gobierno de Veracruz, a cargo de Javier Duarte de Ochoa. Este hecho fue narrado en la página electrónica del periódico el Universal<sup>2</sup>. El video también puede ser visto en youtube<sup>3</sup>.*

*3. A las catorce horas con cincuenta minutos de ese mismo día, Andrés Manuel López Obrador publicó un video en la cuenta de twitter @lopezobrador\_ en la que afirmó que si Miguel Ángel Yunes Linares demostraba que él había recibido dinero de Javier Duarte de Ochoa renunciaría a la política. Este video también puede ser visto en la página del medio informativo Radio Fórmula<sup>4</sup> y en youtube<sup>5</sup>.*

*4. Al respecto, en la misma fecha, en otro video, Miguel Ángel Yunes Linares respondió que Andrés Manuel López Obrador "y su movimiento" recibían mensualmente 2.5 millones de pesos, de Javier Duarte de Ochoa, como pago para evitar el cumplimiento de la amenaza de obstruir las válvulas de la "Presa Yuribia" y así, impedir el abasto de agua a los habitantes del Coatzacoalcos, Veracruz.*

*Yunes Linares afirmó que, en realidad, esos pagos mensuales fueron utilizados para financiar a MORENA en el sur del Estado de Veracruz.*

*Añadió que, durante la campaña electoral del Proceso Electoral de 2016, celebrado en la entidad, Andrés Manuel López Obrador hizo un acuerdo con Gabriel Deantes, exfuncionario del Gobierno de Veracruz en la administración de Javier Duarte de Ochoa, para recibir dinero del gobierno del estado. Yunes Linares afirmó que Gabriel Deantes era el operador financiero de Javier Duarte de Ochoa y que aportaría las pruebas de sus dichos.*

---

<sup>1</sup> Véase la página electrónica del periódico "Excelsior", <http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/21/1147818>

<sup>2</sup> <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/02/22/los-yunes-y-amlo-intercambian-acusaciones-en-veracruz>

<sup>3</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=TtD-5r4-l4I>

<sup>4</sup> <http://radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=664442&idFC=2017>

<sup>5</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=pcMslkVH94Q>

*Todo esto fue reportado en el portal electrónico del periódico El Universal<sup>6</sup>, y también puede ser visualizado en youtube<sup>7</sup>.*

*5. El 24 de febrero, Miguel Ángel Yunes Linares se presentó en el programa "Ciro Gómez Leyva por la mañana" de la cadena Radiofórmula (sic). En él, Miguel Ángel Yunes Linares se refirió a las pruebas para sustentar la afirmación de que existieron transferencias de recursos públicos del Gobierno del Estado de Veracruz a MORENA.*

*Por ello, en ese programa de radio se presentó la grabación de un audio, en el cual se escucha la voz de un sujeto, quien expresó que inmediatamente informaría al Gobernador del Estado de Veracruz que MORENA era un fenómeno electoral y, por ello, era necesario aliarse con ese partido político "y a darle posiciones en el acuerdo con Andrés Manuel".*

*En el programa de radio se afirmó que la voz del audio corresponde a Gabriel Deantes Ramos, ex Secretario del Trabajo en Veracruz durante la administración de Javier Duarte de Ochoa. Se señaló que como resultado del acuerdo entre el Gobierno del Estado de Veracruz y MORENA, se designó a Jessica Moreno Torres, esposa de Arturo López Obrador (hermano de Andrés Manuel López Obrador), como Oficial Mayor de la Secretaría de Educación del Estado de Veracruz, durante la administración de Javier Duarte de Ochoa.*

*En el mismo programa radio, Miguel Ángel Yunes Linares afirmó que la transferencia de recursos del gobierno del estado de Veracruz a MORENA, inició en 2014 y duró dos años, como consecuencia de un convenio en el que el Gobierno de Estado de Veracruz se comprometió a entregar, en efectivo, 2.5 millones de pesos mensuales a un grupo de personas de Tatahuicapa, Veracruz, con el fin de que éstos no obstruyeran las válvulas de la "Presa Yuribia" y así impedir el desabastecimiento de agua a los habitantes de Coatzacoalcos.*

*Inmediatamente, Yunes Linares también declaró que una de las verdaderas finalidades de ese convenio era destinar esas cantidades millonarias-provenientes de recursos públicos del Gobierno del Estado de Veracruz- a MORENA, a través de sus dirigentes.*

*El mismo Yunes Linares señaló que en el convenio, por parte del Gobierno del Estado, participaron los entonces funcionarios: Erick Lagos (Secretario de Gobierno); Marlon Ramírez (Subsecretario); Luis Ángel Bravo (Procurador de Justicia); Mauricio Audirac (Secretario de Finanzas); Anilú Ingram (entonces*

---

<sup>6</sup> <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/02/22/responde-yunes-amlo-recibia-25-mdp-al-mes-de-duarte>

<sup>7</sup> <https://www.youtube.com/watch?v=RKjaGN5TC3E>

*Presidenta de la Legislatura); el Director de la Comisión de Agua. Por la otra parte, participaron dirigentes y una diputada de MORENA.*

*Todo lo que se describe en este hecho puede ser consultado en la página de internet del medio informativo Radio fórmula, y fue conocido por el partido al que represento el mismo 24 de febrero último.*

*6. Como se ve, lo descrito da cuenta de un posible financiamiento indebido en favor de MORENA por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, ya que está prohibido que los partidos políticos reciban financiamiento de los Gobiernos de los Estados. Por otro lado, también revela un posible incumplimiento en las obligaciones de fiscalización por parte de ese partido al no reportar esos ingresos, y el uso indebido de recursos públicos.*

*(...)"*

#### ***Indebido financiamiento de los partidos políticos***

*El artículo 41, Base II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la ley garantizará que los Partidos Políticos Nacionales cuenten de manera equitativa con elementos para llevar a cabo sus actividades y señalará las reglas que se sujetará el funcionamiento de los propios partidos y sus campañas electorales, debiendo garantizar que los recursos públicos prevalezcan sobre los de origen privado.*

*Ese mismo artículo establece que el financiamiento público para los partidos políticos que mantengan su registro después de cada elección se compondrá de las ministraciones destinadas al sostenimiento de sus actividades ordinarias permanentes, las tendientes a la obtención del voto durante los procesos electorales y las de carácter específico.*

*Por su parte, el artículo 41, Base II, penúltimo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la ley establecerá el monto máximo que tendrán las aportaciones de los militantes y simpatizantes de los partidos políticos.*

*Como se ve, la Constitución prevé que los partidos políticos cuenten con financiamientos público y privado, y que, el primero debe prevalecer respecto del otro.*

*Por otro lado, el artículo 51, párrafo 1, inciso a), fracción I de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que le corresponde al Consejo General y a los Organismos Públicos Locales determinar el monto anual para los Partidos Políticos Nacionales y locales.*

*Por otro lado, el artículo 54, párrafo 1, inciso a) y b) de la Ley General de Partidos Políticos establecen que no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, ni a los aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por si o por interpósito de persona y bajo ninguna circunstancia:*

*a. Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos.*

*b. Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal.*

*De tal modo, los partidos políticos, sus dirigentes, candidatos, militantes, están impedidos para recibir recursos de los Gobiernos de las Entidades Federativas, pues esto no está contemplado como parte del financiamiento público que pueden recibir los partidos políticos.*

*En ese sentido, de probarse los hechos narrados en esta denuncia, mostrarían que Morena incumplió con las disposiciones constitucionales y legales sobre financiamiento, pues habría recibido dinero por parte del Gobierno del Estado de Veracruz, a pesar de que esta conducta esta tajantemente prohibida por la normatividad electoral.*

*En efecto, los hechos narrados muestran que, Miguel Ángel Yunes Linares señaló que desde 2014, el Gobierno del estado de Veracruz, celebró un convenio con un grupo de personas de Tatahuicapan, Veracruz, con el fin de otorgarles 2.5 millones de pesos mensuales en efectivo durante dos años, para que estas personas no impidieran el abasto de agua a Coatzacoalcos, Veracruz. Sin embargo, Yunes Linares también narra que ese convenio en realidad, fue una simulación porque el verdadero fin era apoyar con recursos públicos del Gobierno del Estado de Veracruz a los dirigentes de Morena.*

*En ese sentido, Morena habría incurrido en un actuar ilegal al participar en un convenio público simulado, cuya verdadera finalidad no evitar el desabasto de agua en Coatzacoalcos, sino destinar recursos públicos del Gobierno del Estado de Veracruz a Morena a través de sus dirigentes.*

*La otra infracción es que Morena recibió recursos públicos del Gobierno del Estado a pesar de que este tipo de financiamiento está prohibido en el sistema electoral mexicano.*

*(...)*

***Incumplimiento de los deberes de fiscalización***

*El artículo 41, Base II, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que la ley establecerá todos los procedimientos para el control, fiscalización oportuna y vigilancia durante la campaña del origen y uso de todos los recursos con que cuenten los partidos políticos.*

*Por otra parte, el artículo 41, Base V, apartado B, párrafo tercero, establece que la fiscalización de las finanzas de los partidos políticos y de las campañas de los candidatos estará a cargo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y que éste no estará limitado por los secretos, bancario, fiduciario y fiscal y contará con el apoyo de las autoridades federales y locales.*

*Como se ve, por disposición constitucional que las finanzas de los partidos políticos incluidas las relativas a las campañas deben ser fiscalizadas.*

*En ese sentido, el artículo 191, párrafo 1, inciso d) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece que es facultad del Consejo General del Instituto Nacional Electoral vigilar que el origen y aplicación de los recursos de los partidos observen las disposiciones legales.*

*Por su parte, el artículo 199, párrafo 1, inciso c) de la misma ley prevé que la Unidad Técnica de Fiscalización tiene la facultad de vigilar que los recursos de los partidos políticos tengan un origen ilícito y se apliquen exclusivamente para el cumplimiento de los objetivos de los partidos.*

*A su vez, el artículo 221, párrafo 1, de la misma Ley General establece que el Instituto Nacional Electoral establecerá convenios con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la unidad administrativa competente en materia de inteligencia financiera para prevenir detectar y sancionar el uso de recursos públicos que realicen los organismos o dependencias de la Federación, de las entidades federativas o de los municipios durante cualquier Proceso Electoral.*

*Como se ve, el Instituto Nacional Electoral tiene la obligación de verificar que el origen de los recursos de los partidos sea lícito.*

*Para cumplir con ese fin, dentro de sus obligaciones se encuentra la de prevenir, detectar y sancionar el uso de recursos públicos por parte de los organismos y dependencias públicas y de la federación, estados y municipios, en favor de los partidos políticos o durante los procesos electorales.*

*El artículo 72 de la Ley General de Partidos Políticos deben reportar los ingresos y gastos de financiamiento para actividades ordinarias.*

*En relación con lo anterior, el artículo 78, párrafo 1, inciso a) y b) de la misma Ley establece que, respecto al gasto ordinario, los partidos políticos deben presentar informes trimestrales de avance del ejercicio e informes anuales, en los que deben incluir los ingresos y gastos.*

*A su vez, el artículo 79, párrafo 1, inciso a) de la Ley General de Partidos Políticos establece que los partidos políticos deben presentar informes de precampaña por cada uno de los precandidatos, a más tardar 10 días después de que concluyan las precampañas, en los que deberán especificarse el origen y monto de los ingresos, así como los gastos realizados.*

*Por su parte, el artículo 79, párrafo 1, inciso b), de la misma ley ordena que los partidos políticos presenten informes de campaña por cada elección, que deberán incluir los gastos que el partido y los candidatos realicen, los ingresos y gastos por períodos de treinta días, que deberán entregarse a la Unidad Técnica de Fiscalización, dentro de los tres días siguientes a la conclusión de cada período.*

*Como se ve, los partidos políticos tienen la obligación de presentar informes al Instituto Nacional Electoral sobre el origen de los recursos que reciben, así como los gastos que realicen, tanto en el caso de precampañas y campañas o bien, por gastos ordinarios.*

*En suma, es obligación de los partidos políticos proporcionar a la información al Instituto Nacional Electoral, para que todos sus recursos sean fiscalizables.*

*Ante los hechos denunciados por el actual Gobernador del Estado de Veracruz, en relación a que en la administración estatal anterior simuló un convenio, cuyo verdadero fin fue financiar con 2.5 millones de pesos mensuales a MORENA, provenientes de recursos públicos, los cuáles fueron entregados desde 2014, durante dos años y toda vez que se trata de un hecho que se conoció hasta el 24 de febrero de este año, es necesario que el Instituto Nacional Electoral lleve a cabo una labor de investigación y fiscalización de los recursos percibidos y erogados por Morena, sus dirigentes e incluso sus candidatos, con el fin de verificar si ese instituto político recibió indebidamente recursos públicos del Gobierno del estado de Veracruz, así como si cumplió con sus obligaciones de fiscalización.*

*Lo anterior, adquiere mayor relevancia porque se trata de una acusación del Gobernador del Estado de Veracruz, es decir, de un alto funcionario que conoce el destino de los recursos públicos que ha erogado el Gobierno de ese Estado,*

*quien públicamente ha señalado que Morena recibió recursos de ese gobierno, a pesar de tratarse una clase de financiamiento que no está permitido, por lo cual, es indispensable la intervención del Instituto Nacional Electoral ante la gravedad de las acusaciones.*

*En ese sentido, es importante destacar que la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral tiene la obligación de vigilar que los recursos de los partidos tengan un origen ilícito. Al respecto es evidente la necesidad de una investigación por parte de la Unidad, porque no es lícito que el Gobierno del Estado de Veracruz dispusieron de 2.5 millones de pesos mensuales en favor de Morena, ya que este tipo de financiamiento no está permitido por la Legislación Electoral.*

*La investigación que realice la autoridad electoral sobre el tema es procedente porque su fin, no es únicamente sancionar las irregularidades en materia de fiscalización y financiamiento, sino que el Instituto Nacional Electoral tiene la obligación de prevenir y detectar el uso de recursos públicos por parte de las dependencias y organismos de cualquier nivel de gobierno en favor de los partidos o sus candidatos. En ese sentido, el Instituto Nacional Electoral debe investigar las acusaciones del Gobernador del Estado de Veracruz, en el sentido de que ese gobierno ha financiado al partido Morena y sus dirigentes, con el fin de prevenir conductas similares porque como se ha señalado son contrarias las normas electorales sobre financiamiento de los partidos políticos, uso de recursos públicos y fiscalización y es necesario impedir que de nueva cuenta se vuelvan a utilizar recursos públicos de los gobiernos de las entidades federativas en favor de los partidos políticos, esto con independencia de las sanciones correspondientes.*

*Además de lo anterior, debe acreditarse que Morena recibió recursos públicos del Gobierno del Estado de Veracruz, el Instituto Nacional Electoral deberá establecer las sanciones para el caso de que Morena haya incumplido con las obligaciones de reportar el origen de sus ingresos y su destino, así como contar con toda la documentación de contabilidad que lo sustente.*

### ***Indebido uso de recursos públicos para financiar a los partidos políticos***

*El artículo 134, primer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los recursos económicos de que disponga la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, se administrarán con eficiencia, eficacia, economía transparencia y honradez para satisfacer los objetivos a los que estén destinados.*



*El séptimo párrafo del mismo artículo establece que los servidores públicos de la federación, las entidades federativas, los municipios y las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, tienen en todo tiempo la obligación de aplicar con imparcialidad los recursos públicos que están bajo su responsabilidad, sin influir en la equidad de la competencia entre los partidos políticos.*

*Por otro lado, el artículo 54, párrafo 1, inciso a) y b) de la Ley General de Partidos Políticos, establecen que los poderes ejecutivo, legislativo y judicial de la federación y de las entidades federativas y los ayuntamientos, así como las dependencias, entidades u organismos de la administración pública federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal no podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, ni a los aspirantes o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.*

*Como se ve, de conformidad con el artículo 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establecen que los recursos públicos deben utilizarse para los fines para los cuales están destinados.*

*En ese sentido, para cumplir con tal fin, entre otras formas, los poderes ejecutivos de las entidades federativas, los organismos de la administración pública estatal están impedidos para destinar los recursos públicos con que cuenten para financiar a los partidos políticos.*

*Dicho de otra forma, si los gobiernos de los estados destinan sus recursos a los partidos políticos, incumplirán con la obligación constitucional de destinar esos recursos públicos a los fines para los cuales se han establecido, pues hacerlo en favor de los partidos políticos no es lícito.*

*En este caso, como ya se dijo, existe el señalamiento público por parte del Gobernador del Estado de Veracruz, de que la administración anterior, realizó un convenio con un grupo de personas de Tatahuicapa, Veracruz, cuyo verdadero fin era entregar 2.5 millones de pesos mensuales desde 2014 a dirigentes del partido político Morena.*

*En caso de demostrarse este hecho, existiría una vulneración al artículo 134 constitucional, ya que se habrían destinado recursos públicos por parte del Gobierno del Estado de Veracruz a una finalidad prohibida, es decir, a financiar a un partido político o a sus dirigentes.*

**Elementos ofertados al escrito de queja para sustentar los hechos denunciados:**

“(…)

**1. Link** <http://www.excelsior.com.mx/nacional/2017/02/21/1147818>, consistente en la nota periodística "*López Obrador inicia gira de tres días por Veracruz*", publicada el veintiuno de febrero de dos mil diecisiete, en el portal electrónico del periódico Excélsior.

**2. Link** <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/estados/2017/02/22/los-yunes-v-amlo-intercambian-acusaciones-en-veracruz>, consistente en la nota periodística "*Los Yunes y AMLO intercambian acusaciones en Veracruz*", publicada el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en el portal electrónico del periódico El Universal.

**3.Link** <http://www.eluniversal.com.mx/articulo/nacion/politica/2017/02/22/responde-yunes-amlo-recibia-25-mdp-al-mes-de-duarte>, consistente en la nota periodística "*Responde Yunes: AMLO recibía 2.5 mdp al mes de Duarte*", publicada el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en el portal electrónico del periódico El Universal.

**4. Link** <http://www.radioformula.com.mx/notas.asp?Idn=664442&idFC=2017>, consistente en la nota periodística "*Renuncio a la política si Yunes demuestra que recibí dinero de Duarte: López Obrador*", publicada el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en el portal de noticias Radio fórmula.

**5. Transcripción del video** con duración de 1 minuto con 28 segundos, publicado el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en la dirección electrónica <https://www.youtube.com/watch?v=TtD-5r4141>, en el que ha dicho del quejoso Miguel Ángel Yunes Linares acusa a Andrés Manuel López Obrador de ser un corrupto por recibir dinero de Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz (...) (sic)

**6. Transcripción del video** con duración de 4 minutos con 56 segundos, publicado el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en la dirección electrónica <https://www.youtube.com/watch?v=2QPC5SfdOrY>, en la que presuntamente Andrés Manuel López Obrador le pide a Miguel Ángel Yunes Linares que demostrara que Javier Duarte de Ochoa, exgobernador de Veracruz, le dio dinero. (...) (sic)

**7. Transcripción del video** con duración de 3 minutos con 17 segundos, publicado el veintidós de febrero de dos mil diecisiete, en la dirección electrónica <https://www.youtube.com/watch?v=IRKjaGN5TC3E>, en el la que ha dicho del denunciante Miguel Ángel Yunes Linares señaló que Andrés Manuel López Obrador y su movimiento recibían 2.5 millones de pesos mensuales del Gobierno del Estado de Veracruz, en la administración de Javier Duarte de Ochoa, a partir de un convenio que celebraron. (...) (sic)

**8. Transcripción del video** consistente en el audio del programa de radio "Ciro Gómez Leyva por la mañana" de la cadena Radiofórmula (sic), de veinticuatro de febrero de del dos mil diecisiete, publicado en la dirección de correo electrónico <http://www.emedios.com.mx/testmovimp3/c117769777.mp3>, en el que a juicio del partido denunciante se presentó un audio de quien supuestamente es el exsecretario del Trabajo del Gobierno del Estado de Veracruz, Gabriel Deantes, quien afirma que es necesario realizar un pacto con MORENA y con Andrés Manuel López Obrador a cambio de posiciones en el gobierno. En la transcripción también se advierte una entrevista a Miguel Ángel Yunes Linares quien manifiesta que el Gobierno del Estado de Veracruz, en la administración de Javier Duarte de Ochoa, firmó un acuerdo con un grupo de personas de Tatahuicapan, Veracruz, para impedir el desabasto de agua en Coatzacoalcos, Veracruz, a cambio del pago de 2.5 millones de pesos mensuales asimismo afirma que esa cantidad en realidad fue entregada a dirigentes del partido MORENA.

**9. Transcripción del video** consistente en un audio consultable en la página de internet <https://www.youtube.com/watch?v=usNOKqS4ORQ>.

**10. Presuncional Legal y Humana.** Consistente en todo aquello que favorezca a los hechos denunciados.

**11. Instrumental de Actuaciones.** Consistente en todo aquello que favorezca a los hechos denunciados.

**III. Acuerdo de recepción.** El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización tuvo por recibido el escrito de queja, acordó integrar el expediente respectivo con el número **INE/Q-COF-UTF/37/2017**, registrarlo en el libro de gobierno y notificar la recepción al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto. Finalmente, determinó realizar una investigación preliminar para determinar su posible admisión. (Foja 42 del expediente).

**IV. Aviso de recepción del escrito de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.** El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/2713/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, la recepción y el registro en el libro de gobierno del procedimiento de queja identificado INE/Q-COF-UTF/37/2017. (Foja 43 del expediente).

**V. Requerimiento de información al Director General de la Comisión del Agua de Veracruz.**

a) El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, por medio del oficio INE/UTF/DRN/2715/2017, se le requirió al Director General de la Comisión del Agua de Veracruz de Ignacio de la Llave, información relativa al procedimiento de mérito. (Fojas 45-48 del expediente).

b) El cinco de abril de dos mil diecisiete, por medio del oficio INE/UTF/DRN/2715/2017, se le requirió al Director General de la Comisión del Agua de Veracruz de Ignacio de la Llave información relativa a los hechos denunciados.

c) El diez de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio FOPE09/CAEV/DG/01/2017/193, el Encargado de la Unidad Jurídica de la Comisión del Agua del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dio contestación a la solicitud formulada. (Fojas 85-87 del expediente)

d) El veintisiete de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio FOPE09/CAEV/DG/01/2017/298, en los mismos términos que el diverso FOPE09/CAEV/DG/01/2017/193, el Encargado de la Unidad Jurídica de la Comisión del Agua del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave dio contestación a la solicitud formulada. (Fojas 407-413 del expediente)

**VI. Requerimiento de información a la Delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**

a) El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, por medio del oficio INE/UTF/DRN/2715/2017, se requirió a la Delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de que brindara información respecto del procedimiento que nos ocupa. (Fojas 52-53 del expediente).

**b)** El treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, mediante el oficio número 150.FI.152.0133, la servidora pública dio contestación a la solicitud formulada. (Foja 60 del expediente).

**VII. Requerimiento de información al Secretario de Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**

**a)** El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, por medio del oficio INE/UTF/DRN/2718/2017, se le requirió al Secretario de Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de que brindara información respecto de los hechos materia del presente procedimiento. (Fojas 61-62 del expediente).

**b)** El veintiocho de marzo de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número SG/DGJ/1573/03/2017, mediante el cual, el funcionario público dio contestación a la solicitud formulada. (Foja 80 del expediente).

**c)** El cuatro de abril de dos mil diecisiete, mediante el oficio INE/UTF/DRN/3626/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización se solicitó al Secretario de Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, información relacionada con los hechos materia de denuncia. (Fojas 417-418 del expediente).

**d)** Mediante el oficio SG-DGJ/1989/04/2017 de fecha veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, el Secretario de Gobernación del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave respondió al requerimiento formulado. (Fojas 144-175 y 419-428 del expediente).

**e)** El trece de diciembre de dos mil diecisiete, mediante el oficio INE/UTF/DRN/18977/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización se solicitó al Secretario de Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, información relacionada con los hechos materia del presente procedimiento. (Fojas 414-415 del expediente).

**f)** A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta por parte de la autoridad requerida.

**VIII. Requerimiento de información al Presidente Municipal de Tatahuicapan de Juárez en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**

a) El dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, por medio del oficio INE/UTF/DRN/2717/2017, se requirió al Presidente Municipal de Tatahuicapan de Juárez en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el propósito de que brindara información respecto del convenio denunciado. (Fojas 69-70 del expediente).

b) El treinta de marzo de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número 00100/PDCIA/2017, por el que se atiende el requerimiento formulado. (Fojas 77-79 expediente).

c) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/JD20-VER/0535/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización requirió al Presidente Municipal de Tatahuicapan de Juárez en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para que brindara información respecto de los hechos denunciados. (Fojas 449-450 del expediente).

d) El quince de mayo de dos mil dieciocho, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número PRESI/TATA/0176/2018, por el que se atiende el requerimiento de información formulado (Fojas 429-430 expediente).

**IX. Solicitud al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave del Instituto Nacional Electoral para la aplicación de cuestionario.**

a) El cuatro de abril de dos mil diecisiete, por medio del oficio INE/UTF/DRN/3624/2017, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave la aplicación de un cuestionario a los CC. Calixto Cruz Martínez, Isaías Landa Domínguez, Inocente Bautista Luis y Félix Hernández González; todos en su carácter de autoridades ejidales del Municipio de Tatahuicapan de Juárez, para que informaran sobre los hechos denunciados. (Fojas 107-109 del expediente).

b) El veinte de abril de dos mil diecisiete, por medio del oficio INE/UTF-VER/004/2017, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, remitió las constancias que integran la diligencia referida en el inciso que antecede. (Fojas 110-137 del expediente).

## **X. Cuestionarios aplicados**

### **C. Isaías Landa Domínguez. Presidente del Consejo de Vigilancia de Tatahuicapan de Juárez**

a) El doce de abril de dos mil diecisiete, se le requirió al **C. Isaías Landa Domínguez**, la información señalada en el cuestionario de mérito a efecto de esclarecer los hechos materia de la presente Resolución. (Fojas 111-112 del expediente).

b) El doce de abril del dos mil diecisiete, como resultado de la aplicación del cuestionario al **C. Isaías Landa Domínguez**, este dio contestación a las interrogantes que le fueron planteadas. (Fojas 113-115 del expediente).

### **C. Inocente Bautista Luis. Expresidente del Consejo de Vigilancia de Tatahuicapan de Juárez**

c) El doce de abril de dos mil diecisiete, se le requirió al **C. Inocente Bautista Luis**, la información señalada en el cuestionario de mérito a efecto de esclarecer los hechos materia de la presente Resolución. (Fojas 116-117 del expediente).

d) El doce de abril del dos mil diecisiete, como resultado de la aplicación del cuestionario al **C. Inocente Bautista Luis**, este dio contestación a las interrogantes que le fueron planteadas (Fojas 118-120 del expediente).

### **C. Calixto Cruz Martínez. Presidente del Comisariado Ejidal de Tatahuicapan de Juárez**

e) El doce de abril de dos mil diecisiete, se le requirió al **C. Calixto Cruz Martínez**, la información señalada en el cuestionario de mérito a efecto de esclarecer los hechos materia de la presente Resolución. (Fojas 121-122 del expediente).

f) El doce de abril del dos mil diecisiete, como resultado de la aplicación del cuestionario al **C. Calixto Cruz Martínez**, este dio contestación a las interrogantes que le fueron planteadas. (Fojas 123-128 del expediente).

**C. Félix Hernández González.**

**Presidente del Comité de la Cuenca del Río Texizapan**

**g)** El doce de abril de dos mil diecisiete, se le requirió al **C. Félix Hernández González**, la información señalada en el cuestionario de mérito a efecto de esclarecer los hechos materia de la presente Resolución. (Fojas 129-130 del expediente).

**h)** El doce de abril del dos mil diecisiete, como resultado de la aplicación del cuestionario al **C. Félix Hernández González**, este dio contestación a las interrogantes que le fueron planteadas (Fojas 131-137 del expediente).

**XI. Solicitudes al Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave.**

**a)** El cinco de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/3703/2017, se requirió al Organismo Público Local Electoral en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de que informará el estado procesal que guarda la vista emitida por la Unidad Técnica de lo Contencioso del Instituto Nacional Electoral. (Fojas 138-139 del expediente).

**b)** El diecinueve de abril de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio número OPLEV/SE/2085/2017 y su anexo, el oficio OPLEV/DEAJ/380/IV/2017, mediante el cual dio contestación a lo solicitado. (Fojas 140-143 del expediente).

**c)** El nueve de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/15620/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información al Secretario Ejecutivo del Organismo Público Local Electoral de Veracruz (en adelante OPLE Veracruz), información y documentación respecto del expediente CG/SE/POS/PRI/004/2017 y su resolución OPLEV/CG245/2017. (Fojas 378-379 del expediente).

**d)** El veintitrés de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio OPLEV/SE/8034/2017, el Secretario Ejecutivo del OPLE Veracruz atendió la solicitud referida (Fojas 380-384 del expediente y Anexo único)

**XII. Acuerdo de admisión del procedimiento de queja.** El veintisiete de abril de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización, tuvo por admitido el procedimiento de queja, ordenando notificar dicha admisión al Secretario Ejecutivo



del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización, a los sujetos incoados, así como publicar en estrados el contenido del acuerdo en comento. (Foja 177 del expediente).

**XIII. Publicación en estrados del acuerdo de admisión del procedimiento.**

a) El veintisiete de abril de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de Fiscalización fijó en los estrados del Instituto durante setenta y dos horas, el acuerdo de admisión del procedimiento de mérito y la respectiva cédula de conocimiento. (Fojas 178-179 del expediente)

b) El tres de mayo de dos mil diecisiete, se retiraron del lugar que ocupan en el Instituto los estrados de la Unidad Técnica de Fiscalización, el citado acuerdo de admisión y la cédula de conocimientos respectiva. (Foja 180 del expediente)

**XIV. Notificación de admisión del procedimiento de queja al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.** El veintisiete de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/4795/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral Presidente de la Comisión de Fiscalización de este Instituto, el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 182 del expediente).

**XV. Notificación de inicio del procedimiento de queja al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.** El veintisiete de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/4794/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario Ejecutivo del Consejo General el inicio del procedimiento de mérito. (Foja 181 del expediente)

**XVI. Notificación de inicio de procedimiento de queja y requerimiento de información al partido político incoado.**

a) El veintisiete de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/5073/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Partido Morena, la admisión del procedimiento de queja. (Fojas 183-185 del expediente).

b) El cuatro de mayo de dos mil diecisiete, el Partido Morena, dio contestación a la solicitud de información formulada. (Fojas 186-189 del expediente)

**XVII. Solicitudes de información a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.**

- a) El tres de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/6469/2017, se requirió información a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales, (en adelante FEPADE), relacionada con el procedimiento de mérito. (Fojas 193-194 del expediente)
- b) El doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio 9275/DGAPCPMDE/FEPADE/2017, la FEPADE atendió el requerimiento de información planteado. (Fojas 195-197 del expediente)
- c) El dieciséis de octubre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/14498/2017, se requirió información a la FEPADE, relacionada con una carpeta de investigación de dicha autoridad. (Fojas 393-394 del expediente)
- d) El doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio FEPADE-E-088/2017, la FEPADE dio respuesta al requerimiento de información planteado. (Foja 395 del expediente)

**XVIII. Solicitud de información de la Unidad de Investigación y Litigación de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales.**

- a) El quince de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio FEPADE-E-034/2017, la Unidad de Investigación y Litigación de la FEPADE, solicitó se le remitiera copia certificada de la totalidad de las constancias que obran en el expediente de mérito. (Fojas 254-255 del expediente)
- b) El veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/8176/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización atendió el requerimiento de información planteado. (Foja 256 del expediente)
- c) El doce de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio FEPADE-E-012/2018, la FEPADE solicitó nuevamente se le remitiera copia certificada de la totalidad de las constancias que obran en el expediente de mérito. (Foja 396 del expediente)
- d) El catorce de febrero de dos mil dieciocho, mediante oficio INE/UTF/DRN/18461/2018, la Unidad Técnica de Fiscalización atendió el requerimiento de información planteado. (Foja 397 del expediente)

**XIX. Solicitud de información a la Dirección de Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos.**

a) El diez de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/7159/2017, se requirió información a la Dirección de Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, (en adelante Dirección de Prerrogativas), atinente a la filiación partidista de diversas personas relacionadas con los hechos investigados. (Fojas 190-191 del expediente)

b) El dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/1326/2017, la Dirección de Prerrogativas atendió el requerimiento de información planteado. (Foja 192 del expediente)

**XX. Solicitud de Información a la Dirección de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral.**

a) El diez de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/7158/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información a la Dirección de lo Contencioso de la Dirección Jurídica del Instituto Nacional Electoral (en adelante Dirección Jurídica), información respecto de diversas personas involucradas con los hechos materia de estudio. (Fojas 198-199 del expediente).

b) El doce de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/DSL/SSL/11668/2017, la Dirección Jurídica atendió la solicitud de información (Fojas 200-253 del expediente)

**XXI. Solicitudes de información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros.**

a) El veinticuatro de mayo y nueve de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficios INE/UTF/DRN/263/2017 e INE/UTF/DRN/504/2017, se requirió información a la Dirección de Auditoría de Partidos Políticos, Agrupaciones Políticas y Otros, (en adelante Dirección de Auditoría), relacionada con los hechos motivo del procedimiento que nos ocupa, en específico respecto de si determinados funcionarios ejidales de Tatahuicapan realizaron aportaciones al partido Morena. (Fojas 257-258 y 385-386 del expediente)

b) El catorce de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA-L/1362/17, la Dirección de Auditoría atendió el requerimiento de información antes señalado. (Fojas 387-389 del expediente)

**XXII. Solicitud de información a la Presidencia Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave.**

a) El dieciséis de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/7530/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización solicitó información a la Presidencia Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, relacionada con los hechos materia del presente procedimiento. (Fojas 259-261 del expediente).

b) El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, mediante oficio PRES 403/2017, la Presidencia Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz de Ignacio de la Llave, atendió la solicitud de información planteada (Fojas 276-277 del expediente)

**XXIII. Solicitud al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave del Instituto Nacional Electoral para la aplicación de cuestionario.**

a) El veinticuatro de mayo de dos mil diecisiete, por medio del oficio INE/UTF/DRN/8224/2017, se solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave la aplicación de un cuestionario a diversos ciudadanos, con la finalidad de obtener mayor información respecto de los hechos denunciados (Fojas 485-486 del expediente).

b) El trece de junio de dos mil diecisiete, por medio del oficio INE/UTF-VER/043/2017, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, remitió las constancias que integran la diligencia referida en el inciso que antecede. (Fojas 278-377 del expediente).

**XXIV. Cuestionarios aplicados**

**C. Pascual Lorenzo Ruíz.**

**Presidente del Comisariado Ejidal de Tatahuicapan de Juárez**

a) El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se le requirió al **C. Pascual Lorenzo Ruíz**, la información señalada en el cuestionario de mérito a efecto de esclarecer los hechos materia de la presente Resolución. (Fojas 281-282 del expediente)

**b)** El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, como resultado de la aplicación del cuestionario al **C. Pascual Lorenzo Ruíz**, este dio contestación a las interrogantes que le fueron planteadas. (Fojas 283-285 del expediente).

**C. Juan Sánchez Hernández.**

**Presidente del Comité de Vigilancia de la Cuenca del Río Taxisapan**

**a)** El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se le requirió al **C. Juan Sánchez Hernández**, la información señalada en el cuestionario de mérito a efecto de esclarecer los hechos materia de la presente Resolución. (Fojas 286-287 del expediente).

**b)** El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, como resultado de la aplicación del cuestionario al **C. Juan Sánchez Hernández**, este dio contestación a las interrogantes que le fueron planteadas (Fojas 288-290 del expediente).

**C. Evaristo González Bautista.**

**Tesorero del Comité de Vigilancia de la Cuenca del Río Taxisapan**

**a)** El primero de junio de dos mil diecisiete, se le requirió al **C. Evaristo González Bautista**, la información señalada en el cuestionario de mérito a efecto de esclarecer los hechos materia de la presente Resolución. (Fojas 291-292 del expediente).

**b)** El primero de junio de dos mil diecisiete como resultado de la aplicación del cuestionario al **C. Evaristo González Bautista**, este dio contestación a las interrogantes que le fueron planteadas. Asimismo, remite documentación para acreditar su dicho (Fojas 293-295 y 300-377 del expediente).

**C. Felipe Hernández González.**

**Secretario del Comité de Vigilancia de la Cuenca del Río Taxisapan**

**a)** El treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, se le requirió al **C. Felipe Hernández González**, la información señalada en el cuestionario de mérito a efecto de esclarecer los hechos materia de la presente Resolución. (Fojas 296-297 del expediente).

**b)** No obstante lo anterior, del Acta Circunstanciada adjunta a dicho requerimiento se advierte el fallecimiento de la persona requerida, por lo que no fue posible llevar a cabo el cuestionario referido (Fojas 298-299 del expediente).

**XXV. Acuerdo de ampliación.** El veintiuno de julio de dos mil diecisiete, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, emitió un acuerdo para ampliar el plazo establecido para la resolución del procedimiento de mérito, ordenando notificar dicha ampliación al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización el contenido del acuerdo en comento. (Foja 390 del expediente).

**XXVI. Notificación de ampliación al Consejero Presidente de la Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral.** El veintiuno de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/12100/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización informó al Consejero Electoral y Presidente de la Comisión de Fiscalización del acuerdo de ampliación en comento. (Foja 392 del expediente).

**XXVII. Notificación de ampliación al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.** El veintiuno de julio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/12092/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización notificó al Secretario Ejecutivo del Consejo General del acuerdo de ampliación en comento. (Foja 391 del expediente)

**XXVIII. Requerimiento de información de la Dirección de Asesoría y Consulta de la Secretaría de la Función Pública.**

a) El dieciocho de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/CGE/SAJ-R/0119/2017, el Subcontralor General del Instituto Nacional Electoral remitió a la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio DGDI/DA/310/0678/2017, emitido por el Subsecretario de Responsabilidades Administrativas y Contrataciones Públicas de la Secretaría de la Función Pública, por medio del cual hizo del conocimiento de dicha autoridad dos peticiones ciudadanas. (Fojas 402-405 del expediente)

b) El veinte de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/4540/2017, la Unidad Técnica de Fiscalización dio contestación al oficio identificado en el inciso anterior. (Foja 406 del expediente)

**XXIX. Razones y Constancias.**

a) El cuatro de abril de dos mil diecisiete, se emitió la razón y constancia derivada de la búsqueda en el padrón de afiliados o militantes del partido político Morena en el portal del Instituto Nacional Electoral de los CC. Calixto Cruz Martínez, Isaías Landa Domínguez, Inocente Bautista Luis y Félix Hernández González en su

carácter de autoridades ejidales del Municipio de Tatahuicapan de Juárez, a fin de determinar algún vínculo con el instituto político incoado, obteniendo como resultado que los mismos no forman parte de la militancia del instituto político incoado. (Fojas 81-82 del expediente).

**b)** El seis de abril de dos mil diecisiete, se emitió la razón y constancia derivada de la búsqueda en el padrón de afiliados o militantes del partido político Morena en el portal del Instituto Nacional Electoral del C. Filogonio Hernández Bautista, en su carácter de Presidente Municipal de Tatahuicapan de Juárez y el C. Joaquín Caballero Rosiñol, en su carácter de Presidente Municipal de Coatzacoalcos; ambos en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a fin de determinar algún vínculo con el instituto político incoado, de lo anterior se obtuvo, que no existe registro alguno de los ciudadanos investigados en el padrón de militancia (Fojas 83-84 del expediente).

**c)** El once de abril de dos mil diecisiete, se emitió razón y constancia respecto de la existencia y contenido de los nueve links aportados por el quejoso como medio de prueba, es decir, 4 notas periodísticas y 5 videos, obteniendo como resultado que solamente 1 nota periodística se encuentra en el portal señalado por el quejoso mientras que las restantes es imposible detectar su contenido, toda vez que el link no permite abrir las notas ni los videos señalados. (Fojas 88- 97 del expediente).

**d)** El veinticinco de abril de dos mil diecisiete, se emitió razón y constancia respecto de la búsqueda en el padrón de afiliados o militantes del partido político Morena en el portal del Instituto Nacional Electoral de los CC. Erick Alejandro Lagos Hernández, Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz; Marlon Ramírez Marín, Subsecretario de Gobierno; Luis Ángel Bravo Contreras, Procurador de Justicia del Estado de Veracruz; Mauricio Audirac Murillo, Secretario de Finanzas del Estado de Veracruz; Anilú Ingran Vallines, Presidenta de la Legislatura del Estado de Veracruz; Edith Alejandra Theurel Coter, Síndico Único del Municipio de Coatzacoalcos; Francisco Valencia García, Director General de la Comisión del Agua del Estado de Veracruz; Ivan Hillman Chapoy, Delegado Federal de Conagua en el Estado de Veracruz; Pascual Lorenzo Ruiz, Presidente del Comisariado Ejidal; Juan Sánchez Hernández, Presidente del Comité de Vigilancia de la Cuenca del Río Taxisapan; Felipe Hernández González, Secretario del Comité de Vigilancia de la Cuenca del Río Taxisapan; Evaristo González Bautista, Tesorero del Comité de Vigilancia de la Cuenca del Río Taxisapan. Lo anterior, a fin de determinar alguna relación entre los sujetos que suscribieron el convenio analizado y el instituto político incoado, de lo anterior se obtuvo, que no existe registro alguno de los ciudadanos investigados en el padrón de militancia. (Foja 176 del expediente).

**XXX. Emplazamiento al Partido Morena.**

- a) El veintiuno de mayo y quince de junio de dos mil dieciocho, se le emplazó al Partido Morena en el procedimiento en que se actúa. (Fojas 431-432 y 433-434 del expediente).
- b) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta alguna por parte del sujeto emplazado.

**XXXI. Alegatos**

- a) El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, el Director de la Unidad Técnica de Fiscalización, acordó aperturar la etapa de alegatos en el presente procedimiento, y notificar a las partes involucradas para que, manifestaran por escrito lo conveniente a sus intereses. (Foja 463 del expediente)
- b) El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/UTF/DRN/42288/2018, se notificó al Partido Revolucionario Institucional, el acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 466-467 del expediente).
- c) A la fecha de elaboración de la presente Resolución no se cuenta con respuesta alguna del sujeto notificado.
- d) El diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio número INE/UTF/DRN/38987/2018, se notificó al Partido Morena, el acuerdo de alegatos respectivo. (Fojas 464-465 del expediente).
- e) El veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, mediante oficio sin número, el Partido Morena presentó sus alegatos, los que se transcriben a continuación (Fojas 468-479 del expediente).

“(…)

*Por lo que hace a los **hechos** identificados con los numerales 1 al 6 del escrito de queja, niego de manera categórica los señalamientos del quejoso en contra de mi representado, en razón de que en ningún momento ha recibido recurso económico alguno del Gobierno de Veracruz, a cargo de Javier Duarte de Ochoa.*



*Resulta una calumnia el señalamiento de Miguel Ángel Yunes Linares, actual gobernador de Veracruz, en contra de los denunciados que recibieron mensualmente 2.5 millones de pesos de Javier Duarte de Ochoa, como pago para evitar el cumplimiento de la amenaza de obstruir las válvulas de la "Presa Yuribia" y así, impedir el abasto de agua a los habitantes de Coatzacoalcos, Veracruz, señalamiento falaz pues no existe una sola prueba del dicho del gobernante citado.*

*De igual manera, niego el señalamiento en contra de los denunciados que los supuestos "pagos mensuales" fueron utilizados para financiar a **MORENA** en el sur del Estado de Veracruz, como también es falso que Andrés Manuel López Obrador y mi representado, celebraron acuerdos con exfuncionarios del Gobierno de Veracruz para recibir recursos públicos, pues no existe una sola prueba de los señalamientos del quejoso que de transferencias de recursos públicos del Gobierno de Veracruz a **MORENA**.*

*Los señalamientos del quejoso en contra de los denunciados, son falsos, frívolos, vagos, genéricos e imprecisos, pues en el hecho 6 de la queja se menciona: " ... lo descrito da cuenta de un posible financiamiento indebido en favor de MORENA por parte del Gobierno del Estado de Veracruz..." sin embargo, no existe un solo elemento de prueba que acredite el dicho del quejoso, por lo que niego el señalamiento en contra de Andrés Manuel López Obrador y de MORENA.*

*Con fundamento en el artículo **471, párrafo 5, inciso d)** de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE), solicito respetuosamente el desechamiento de la queja que se contesta, debido a que resultan evidentemente frívolas; esto es, de conformidad con el artículo **447, párrafo 1, inciso d)**, de la LGIPE, "La promoción de denuncias frívolas. Para tales efectos, se entenderá como denuncia frívola aquella que se promueva respecto a hechos que no se encuentren soportados en ningún medio de prueba o que no puedan actualizar el supuesto jurídico específico en que se sustente la queja o denuncia."*

*El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan, sirve de apoyo a lo anterior la tesis de **Jurisprudencia 33/2002**, cuyo rubro y contenido es el siguiente:*

***“Partido de la Revolución Democrática  
vs  
Tribunal Electoral del Estado de Puebla***

***Jurisprudencia 33/2002***

***FRIVOLIDAD CONSTATADA AL EXAMINAR EL FONDO DE UN MEDIO DE  
IMPUGNACIÓN. PUEDE DAR LUGAR A UNA SANCIÓN AL PROMOVENTE.***

*En los casos que requieren del estudio detenido del fondo para advertir su frivolidad, o cuando ésta sea pardal respecto del mérito, el promovente puede ser sancionado, en términos del artículo 189, fracción III, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. El calificativo frívolo, aplicado a los medios de impugnación electorales, se entiende referido a las demandas o promociones en las cuales se formulen conscientemente pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio y evidente que no se encuentran al amparo del derecho o ante la inexistencia de hechos que sirvan para actualizar el supuesto jurídico en que se apoyan. Cuando dicha situación se presenta respecto de todo el contenido de una demanda y la frivolidad resulta notoria de la mera lectura cuidadosa del escrito, las leyes procesales suelen determinar que se decrete el desechamiento de plano correspondiente, sin generar artificiosamente un estado de incertidumbre; sin embargo, cuando la frivolidad del escrito sólo se pueda advertir con su estudio detenido o es de manera pardal, el desechamiento no puede darse, lo que obliga al tribunal a entrar al fondo de la cuestión planteada. Un claro ejemplo de este último caso es cuando, no obstante que el impugnante tuvo a su alcance los elementos de convicción necesarios para poder corroborar si efectivamente existieron irregularidades en un acto determinado, se limita a afirmar su existencia, y al momento de que el órgano jurisdiccional lleva a cabo el análisis de éstas, advierte que del material probatorio clara e indudablemente se corrobora lo contrario, mediante pruebas de carácter objetivo, que no requieren de interpretación alguna o de cierto tipo de apreciación de carácter subjetivo, lo que sucede en los casos en que el actor se limita a afirmar que en la totalidad de las casillas instaladas en un municipio o Distrito, la votación fue recibida por personas no autorizadas, y del estudio se advierte que en la generalidad de las casillas impugnadas no resulta cierto. El acceso efectivo a la justicia, como garantía individual de todo gobernado y protegida tanto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos como en las leyes secundarias, no puede presentar abusos por parte del propio gobernado, pues se rompería el sistema de derecho que impera en un estado democrático. La garantía de acceso efectivo a la justicia es correlativa a la existencia de órganos jurisdiccionales o administrativos que imparten justicia, por lo que a esas instancias sólo deben llegar los litigios en los que realmente se requiera la presencia del juzgador para dirimir el conflicto. Por tanto, no cualquier desavenencia, inconformidad o modo particular de apreciar la realidad*

*puede llevarse a los tribunales, sino que sólo deben ventilarse ante el juzgador los supuestos o pretensiones que verdaderamente necesiten del amparo de la justicia. Por tanto, si existen aparentes litigios, supuestas controversias, o modos erróneos de apreciar las cosas, pero al verificar los elementos objetivos que se tienen al alcance se advierte la realidad de las cosas, evidentemente tales hipótesis no deben, bajo ninguna circunstancia, entorpecer el correcto aduar de los tribunales; sobre todo si se tiene en cuenta que los órganos electorales deben resolver con celeridad y antes de ciertas fechas. En tal virtud, una actitud frívola afecta el estado de derecho y resulta grave para los intereses de otros institutos políticos y la ciudadanía, por la incertidumbre que genera la promoción del medio de impugnación, así como de aquellos que sí acuden con seriedad a esta instancia, pues los casos poco serios restan tiempo y esfuerzo a quienes intervienen en ellos, y pueden distraer la atención respectiva de los asuntos que realmente son de trascendencia para los intereses del país o de una entidad federativa, e inclusive el propio tribunal se ve afectado con el uso y desgaste de elementos humanos y materiales en cuestiones que son evidentemente frívolas. Tales conductas deben reprimirse, por lo que el promovente de este tipo de escritos, puede ser sancionado, en términos de la disposición legal citada, tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso.*

*Tercera Época:*

*Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-033/2002. Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-050/2002. Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos. Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-051/2002. Partido de la Revolución Democrática. 13 de febrero de 2002. Unanimidad de votos.*

*La Sala Superior en sesión celebrada el veinte de mayo de dos mil dos, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Justicia Electoral. Revista del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Suplemento 6, Año 2003, páginas 34 a 36."*

*Se actualiza la frivolidad, porque Andrés Manuel López Obrador y mi representado, en ningún momento incurrieron en falta alguna en contra de la normativa electoral.*

*Luego, para que las quejas o denuncias de los partidos políticos que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral sean procedentes deben estar sustentadas en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa*

*electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, en la especie no acontece, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas impide ejercitar tal atribución y otorga a la queja la calidad de frívola.*

*Sirve de apoyo a lo anterior, los criterios sostenidos por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, al dictar la jurisprudencia 12/2010, del tenor siguiente:*

**«Partido de la Revolución Democrática y otros  
vs.  
Consejo General del Instituto Federal Electoral  
Jurisprudencia 12/2010**

**CARGA DE LA PRUEBA. EN EL PROCEDIMIENTO ESPECIAL SANCIONADOR CORRESPONDE AL QUEJOSO O DENUNCIANTE-**De la interpretación de los artículos 41 , base III, apartado D, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 367 a 369 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales se advierte que, en el procedimiento especial sancionador, mediante el cual la autoridad administrativa electoral conoce de las infracciones a la obligación de abstenerse de emplear en la propaganda política o electoral que se difunda en radio y televisión, expresiones que denigren a las instituciones, partidos políticos o calumnien a los ciudadanos, **la carga de la prueba corresponde al quejoso, ya que es su deber aportarlas desde la presentación de la denuncia**, así como identificar aquellas que habrán de requerirse cuando no haya tenido posibilidad de recabarlas; esto con independencia de la facultad investigadora de la autoridad electoral.

*Cuarta Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-122/2008 y acumulados. - Actores: Partido de la Revolución Democrática y otros. -Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral. -20 de agosto de 2008.-Unanimidad de votos. -Apelación. SUPRAP-33/2009.-Ador: Partido Revolucionario Institucional. - Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Federal Electoral. - 19 de marzo de 2009.-Unanimidad de seis votos. -Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar. - Secretario: Eugenio Isidro Gerardo Partida Sánchez. Recurso de apelación. SUP-RAP36/2009.-Advr: Partido Revolucionario Institucional. - Autoridad responsable: Secretario Ejecutivo en su carácter de Secretario del Consejo General del Instituto Federal Electoral.- 10 de abril de 2009.-Unanimidad de seis votos.-Ponente: Constando Carrasco Daza.-Secretaños (sic): Claudia Valle Aguilasoch y Armando Ambriz Hernández.*

*La Sala Superior en sesión pública celebrada el veintitrés de abril de dos mil diez, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.*

*Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 3, Numero 6, 2010, páginas 12y 13. "*

*Habida cuenta que las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en la especie no acontece, así también deberá atenderse el criterio sostenido en la jurisprudencia **16/2011** de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo tenor es el siguiente:*

**"Partido Acción Nacional  
Vs.  
Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de  
Tamaulipas.  
Jurisprudencia 16/2011.**

**PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR. EL DENUNCIANTE DEBE EXPONER LOS HECHOS QUE ESTIMA CONSTITUTIVOS DE INFRACCIÓN LEGAL Y APORTAR ELEMENTOS MÍNIMOS PROBATORIOS PARA QUE LA AUTORIDAD EJERZA SU FACULTAD INVESTIGADORA.** Los artículos 16y 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos garantizan los derechos de los gobernados, relativos a la obligación de la autoridad de fundar y motivar la causa legal del procedimiento en los actos de molestia, así como el específico para los inculpados, de conocer los hechos de que se les acusa. En este contexto, en el procedimiento administrativo sancionador electoral se han desarrollado diversos principios, entre los cuales se encuentra el relativo a que **las quejas o denuncias presentadas por los partidos políticos en contra de otros partidos o funcionarios, que puedan constituir infracciones a la normatividad electoral, deben estar sustentadas, en hechos claros y precisos en los cuales se expliquen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se verificaron y aportar por lo menos un mínimo de material probatorio a fin de que la autoridad administrativa electoral esté en aptitud de determinar si existen indicios que conduzcan a iniciar su facultad investigadora, pues la omisión de alguna de estas exigencias básicas no es apta para instar el ejercicio de tal atribución.** Lo anterior, porque de no considerarse así, se imposibilitaría una adecuada defensa del gobernado a quien se le atribuyen los hechos. Es decir, la función punitiva de los órganos

*administrativos electorales estatales, debe tener un respaldo legalmente suficiente; no obstante, las amplias facultades que se les otorga a tales órganos para conocer, investigar, acusar y sancionar ilícitos.*

*Cuarta Época: Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-250/2007.- Actor: Partido Acción Nacional .- Autoridad responsable: Tercera Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Tamaulipas.-10 de octubre de 2007.-Unanimidad de seis votos. Ponente: Pedro Esteban Penagos López.- Secretaria: Claudia Pastor Badilla. Recurso de apelación. SUP-RAP-142/2008.- Actor. Partido de la Revolución Democrática. -Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral. 10 de septiembre de 2008.-Unanimidad de seis votos.- Ponente: Manuel González Oropeza.- Secretario: David Cienfuegos Salgado. Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-502/2009.-Actor: Sergio Iván García Badillo.- Autoridad responsable: Sala de Segunda Instancia del Tribunal Electoral del Poder Judicial del Estado de San Luis Potosí.-3 de julio de 2009.-Unanimidad de votos.- Ponente: Constancio Carrasco Daza.-Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.*

*Nota: El contenido del artículo 20, apartado A, fracción III, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, interpretado en esta jurisprudencia corresponde con el artículo 20, apartado B fracción III vigente.*

*La Sala Superior en sesión pública celebrada el diecinueve de octubre de dos mil once, aprobó por unanimidad de seis votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 4, Número 9, 2011, páginas 31y 32. "*

*En su caso, en los procedimientos sancionadores electorales debe observarse la presunción de inocencia, criterio sostenido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la jurisprudencia **21/2013** que enseguida se reproduce:*

**Partido Verde Ecologista de México**

**vs.**

**Consejo General del Instituto Federal Electoral  
Jurisprudencia 21/2013**

**PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. DEBE OBSERVARSE EN LOS PROCEDIMIENTOS SANCIONADORES ELECTORALES.**-El artículo 20, apartado B, fracción 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado el dieciocho de junio de dos mil dieciocho, reconoce expresamente el derecho de presunción de inocencia, consagrada en el derecho comunitario por los artículos 14, apartado 2 del Pacto Internacional de

*Derechos Civiles y Políticos, y 8, apartado 2 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, instrumentos ratificados por el Estado Mexicano, en términos del artículo 133 de la Constitución federal como derecho fundamental, que implica la **imposibilidad jurídica de imponer a quienes se les sigue un procedimiento administrativo electoral sancionador, consecuencias previstas para una infracción, cuando no exista prueba que demuestre plenamente su responsabilidad**, motivo por el cual se erige como principio esencial de todo Estado democrático, en tanto su reconocimiento, favorece una adecuada tutela de derechos fundamentales, entre ellos, la libertad, la dignidad humana y el debido proceso. En atención a los fines que persigue el derecho sancionador electoral, consistentes en establecer un sistema punitivo para inhibir conductas que vulneren los principios rectores en la materia, como la legalidad, certeza, independencia, imparcialidad y objetividad, es incuestionable que el derecho constitucional de presunción de inocencia ha de orientar su instrumentación, en la medida que los procedimientos que se instauran para tal efecto, pueden concluir con la imposición de sanciones que incidan en el ámbito de derechos de los gobernados.*

*Quinta Época: Recurso de apelación. SUP-RAP-71 /2008.-Recurrente: Partido Verde Ecologista de México.-Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.-2 de julio de 2008.-Unanimidad de seis votos.-Ponente: Constancio Carrasco Daza.-Secretario: Fabricio Fabio Villegas Estudillo.*

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-1245/2010.-Actora: María del Rosario Espejel Hernández.-Responsable: Comisión Nacional de Garantías del Partido de la Revolución Democrática.-24 de diciembre de 2010.-Unanimidad de seis votos.-Ponente: Flavio Galván Rivera.-Secretaria: Maribel Olvera Acevedo.*

*Recurso de apelación. SUP-RAP-517/2011.-Recurrente: Partido Acción Nacional. Autoridad responsable: Consejo General del Instituto Federal Electoral.- 21 de diciembre de 2011.-Unanimidad de seis votos.-Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar. Secretario: Juan MarCos Dávila Rangel.*

*La Sala Superior en sesión pública celebrada el catorce de agosto de dos mil trece, aprobó por unanimidad de votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria. Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral, Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 6, Número 13, 2013, páginas 59y 60."*

*Por lo anterior, considero que la autoridad administrativa fiscalizadora deberá determinar en este asunto que no ha lugar a imponer sanción alguna como pretende el denunciado, por lo que deberá de declararse improcedente e infundada la queja de marras.*

*Por lo que hace al apartado de **CONSIDERACIONES DE DERECHO**, considero que resulta improcedente la fundamentación legal que invoca el quejoso en su denuncia, pues en ningún momento mi representado ha incurrido en violación alguna a la normativa electoral, como tampoco se ha vulnerado los principios de certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad.*

*Por lo que hace al apartado de la queja denominado **Indebido financiamiento de los partidos políticos**, niego de manera categórica que Andrés Manuel López Obrador o **MORENA** recibieron financiamiento ilegal como aduce el quejoso, pues en ningún momento se ha quebrantado la normativa electoral.*

*Con relación al apartado de la queja denominado **Incumplimiento de los deberes de fiscalización**, niego de manera categórica que Andrés Manuel López Obrador o **MORENA** recibieron financiamiento ilegal como aduce el quejoso, pues en ningún momento se ha quebrantado la normativa electoral, por tal motivo resulta improcedente e infundado el procedimiento de fiscalización incoado en contra de Andrés Manuel López Obrador y del partido político **MORENA**.*

*Respecto al apartado de la queja denominado **Indebido uso de recursos públicos para financiar a los partidos políticos**, como lo he venido señalando, niego de manera categórica que Andrés Manuel López Obrador o **MORENA** recibieron financiamiento ilegal como aduce el quejoso, pues en ningún momento se ha quebrantado la normativa electoral, por tal motivo resulta improcedente e infundado el procedimiento de fiscalización incoado en contra de Andrés Manuel López Obrador y del partido político **MORENA**.*

*En suma, niego de manera categórica las imputaciones de la parte quejosa; esto es, de los hechos planteados por el denunciante no se desprende que Andrés Manuel López Obrador o mi representado cometieron infracción alguna en contra de la normativa electoral, por lo que pido desestimar las pruebas aportadas por el quejoso para acreditar sus afirmaciones, debido a que los hechos que señala son falsos, puesto que en ningún momento se ha vulnerado la normativa electoral.*

*Por lo que hace al apartado de la queja denominado **PRUEBAS**, se objetan todas y cada una de ellas por cuanto hace al contenido, alcance y valor probatorio, debido a que no se acreditan los hechos expuestos en contra de Andrés Manuel López Obrador o **MORENA** pues, en ningún momento, han vulnerado la normativa electoral, por lo que las pruebas aportadas por el quejoso son insuficientes para acreditar su dicho, pues no existe una sola prueba que acredite que los denunciados recibieron financiamiento ilegal*



*Por lo que hace a los denunciados, se ofrecen los siguientes elementos de:*

**PRUEBAS**

1. **LA PRESUNCIONAL** en su doble aspecto, legal y humana, consistente en todo lo que favorezca a los denunciados.
2. **LA INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES.** Consistente en las constancias que obran en el expediente, en todo lo que favorezca a los denunciados.

*Asimismo, en lo que me beneficie en el presente asunto, hago valer el principio de adquisición procesal, criterio emitido por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, en la tesis de Jurisprudencia 19/2008 y la tesis S3EL 009/97, cuyos rubros y contenidos enseguida se transcriben:*

*"Época: Tercera Época*

*Registro: 1000654*

*Instancia: Sala Superior*

*Tipo de Tesis: Jurisprudencia*

*Fuente: Apéndice 1911-Septiembre 2011*

*VIII. Electoral Primera Parte -Vigentes Materia(s): Electoral*

*Tesis: 15*

*Página: 23*

**ADQUISICIÓN PROCESAL EN MATERIA ELECTORAL.**

*Los artículos 14, 15 y 16 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral establecen la forma en que debe efectuarse el ofrecimiento, recepción, desahogo y valoración de las probanzas aportadas en los medios de impugnación, esto es, regulan la actividad probatoria dentro del proceso regido entre otros, por el principio de adquisición procesal, el cual consiste en que los medios de convicción, al tener como finalidad el esclarecimiento de la verdad legal su fuerza convictiva debe ser valorada por el juzgador conforme a esta finalidad en relación a las pretensiones de todas las partes en el juicio y no sólo del oferente, puesto que el proceso se concibe como un todo unitario e indivisible, integrado por la secuencia de actos que se desarrollan progresivamente con el objeto de resolver una controversia. Así, los órganos competentes, al resolver los conflictos sometidos a su conocimiento, deben examinar las pruebas acorde con el citado principio.*

*Cuarta Época:*

*Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-017/97.-Actor: Partido Popular Socialista.- Autoridad responsable: Segunda Sala Unitaria del Tribunal Estatal Electoral del Estado de Guanajuato.-27 de mayo de 1997.-Unanimidad de votos.-Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo.-Secretarios: Esperanza Guadalupe Farías Flores y Roberto Ruiz Martínez.*

*Juicio de revisión constitucional electoral SUP-JRC-356/2007.-Actora: Coalición "Movimiento Ciudadano".- Autoridad responsable: Sala Electoral del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz.-19 de diciembre de 2007.-Unanimidad de seis votos.-Ponente: María del Carmen Alanís Figueroa.- Secretarios: Enrique Figueroa Ávila y Paula Chávez Mata.*

*Juicio para la protección de los derechos político-electorales del ciudadano. SUP-JDC-488/2008.-Actora: Juana Cusi Solana.- Autoridad responsable: Tribunal Electoral del Distrito Federal-14 de agosto de 2008.- Unanimidad de votos.-Ponente: Salvador Olimpo Nava Gomar.-Secretario: Mauricio Iván del Toro Huerta.*

*La Sala Superior en sesión pública celebrada el veinte de noviembre de dos mil ocho, aprobó por unanimidad de cinco votos la jurisprudencia que antecede y la declaró formalmente obligatoria.*

*Gaceta de Jurisprudencia y Tesis en materia electoral Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Año 2, Número 3,2009, páginas 11 y 12."*

*"Época: Tercera Época*

*Registro: 919117*

*Instancia: Sala Superior*

*Tipo de Tesis: Aislada*

*Fuente: Apéndice 2000*

*Tomo VIII, P.R Electoral*

*Materia(s): Electoral*

*Tesis: 46*

*Página: 67*

**ADQUISICIÓN PROCESAL. OPERA EN MATERIA ELECTORAL.**

*Opera la figura jurídica de la adquisición procesal en materia electoral, cuando las pruebas de una de las partes pueden resultar benéficas a los intereses de la contraria del oferente, así como a los del colitigante, lo que hace que las autoridades estén obligadas a examinar y valorar las pruebas que obren en autos a fin de obtener con el resultado de esos medios de convicción, la verdad*

*histórica que debe prevalecer en el caso justiciable, puesto que las pruebas rendidas por una de las partes, no sólo a ella aprovechan, sino también a todas las demás, hayan o no participado en la rendición de las mismas.*

*Juicio de revisión constitucional electoral. SUP-JRC-017/97.-Partido Popular Socialista.- 27 de mayo de 1997.-Unanimidad de votos. -Ponente: Alfonsina Berta Navarro Hidalgo. Secretaria: Esperanza Guadalupe Farías Flores.*

*Revista Justicia Electoral 1997, Tercera Época, suplemento 1, páginas 33-34, Sala Superior, tesis S3EL 009/97.*

(...)"

**XXXII. Cierre de Instrucción.** El cinco de abril de dos mil diecinueve, la Unidad Técnica de Fiscalización acordó cerrar la instrucción del procedimiento de mérito y ordenó formular el Proyecto de Resolución correspondiente.

**XXXIII. Sesión de la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral.** En virtud de lo anterior, se procedió a formular el Proyecto de Resolución, el cual fue aprobado por la Comisión de Fiscalización del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, en la Séptima Sesión Extraordinaria de fecha ocho de abril de dos mil diecinueve, por unanimidad de votos de los presentes, Consejera Electoral Doctora Adriana Favela Herrera y el Consejero Electoral Doctor Ciro Murayama Rendón y el Consejero Presidente Doctor Benito Nacif Hernández.

En virtud de que se desahogaron todas las diligencias necesarias dentro del procedimiento de queja en que se actúa, se procede a determinar lo conducente.

## CONSIDERANDO

**1. Competencia.** Con base en los artículos 41 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 196, numeral 1; 199, numeral 1, incisos c), k) y o); 428, numeral 1, inciso g), tercero transitorio, todos de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Unidad Técnica de Fiscalización es **competente** para tramitar, sustanciar y formular el presente Proyecto de Resolución.

Precisado lo anterior, y con base en el artículo 192, numeral 1, inciso b) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y 5, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la Comisión de Fiscalización es competente para conocer el presente Proyecto de Resolución y someterlo a consideración del Consejo General.

En este sentido, de acuerdo a lo previsto en los artículos 41, Base V, apartado B, penúltimo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35, numeral 1; 44, numeral 1, inciso j) y 191, numeral 1, incisos d) y g) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, este Consejo General es competente para emitir la presente Resolución y, en su caso, imponer las sanciones que procedan.

**2. Normatividad aplicable.** Es relevante señalar que con motivo de la publicación llevada a cabo el veintitrés de mayo de dos mil catorce en el Diario Oficial de la Federación, de los Decretos por los que se expiden la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, y con las modificaciones a los Reglamentos de Fiscalización y de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, aprobadas por este Consejo General en sesión extraordinaria celebrada el cuatro de mayo de dos mil dieciséis, mediante Acuerdos INE/CG320/2016<sup>[1]</sup> e INE/CG319/2016<sup>[2]</sup>, respectivamente, resulta indispensable determinar la normatividad sustantiva y adjetiva aplicable.

En este sentido, por lo que hace a la **normatividad sustantiva** tendrá que estarse a las disposiciones vigentes al momento en que se actualizaron los hechos que dieron origen al procedimiento de queja, esto es a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, así como al Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG1047/2015, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-19/21006.

Lo anterior, en concordancia con el criterio orientador establecido en la tesis relevante **Tesis XLV/2002**, emitida por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, cuyo rubro es “**DERECHO ADMINISTRATIVO SANCIONADOR ELECTORAL. LE SON APLICABLES LOS PRINCIPIOS DEL IUS PUNIENDI DESARROLLADOS POR EL DERECHO PENAL**” y el principio

---

<sup>[1]</sup> Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG1047/2015, en cumplimiento a lo ordenado en el SUP-RAP-19/21006.

<sup>[2]</sup> Acuerdo mediante el cual se modifica el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización aprobado mediante el diverso INE/CG1048/2015, en cumplimiento a lo ordenados en el SUP-RAP-25/2016.

*tempus regit actum*, que refiere que los delitos se juzgarán de acuerdo con las leyes vigentes en la época de su realización.

Ahora bien, por lo que hace a la **normatividad adjetiva o procesal** conviene señalar que en atención al criterio orientador titulado bajo la tesis: 2505 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, octava época, consultable en la página 1741 del Apéndice 2000, Tomo I, materia Constitucional, precedentes relevantes, identificada con el rubro: “**RETROACTIVIDAD DE LAS LEYES PROCESALES. NO EXISTE POR REGLA GENERAL**”, no existe retroactividad en las normas procesales toda vez que los actos de autoridad relacionados con éstas, se agotan en la etapa procesal en que se van originando, provocando que se rijan por la norma vigente al momento de su ejecución. Por tanto, en la sustanciación y resolución del procedimiento de mérito, se aplicará el Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización aprobado mediante el Acuerdo **INE/CG875/2016**.

**3. Cuestión de previo y especial pronunciamiento.** Que, por tratarse de una cuestión de orden público y en virtud de que el artículo 30, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización establece que las causales de improcedencia y sobreseimiento deben ser examinadas de oficio, procede entrar a su estudio para determinar si en el presente caso se actualiza alguna de ellas pues de ser así deberá decretarse el desechamiento o el sobreseimiento del procedimiento que nos ocupa al existir un obstáculo que impida la válida constitución del proceso e imposibilite un pronunciamiento sobre la controversia planteada.

Visto lo anterior es necesario determinar si se actualiza la causal de improcedencia o sobreseimiento prevista en el artículo 30, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización y el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales con relación al 32 numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, dichos preceptos disponen lo siguiente:

**Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de  
Fiscalización**

“(…)

**Artículo 30.  
Improcedencia**

*1. El procedimiento será improcedente cuando:*

(...)

*II. Los hechos denunciados, se consideren frívolos, en términos de los previsto en el artículo 440, numeral 1, inciso e) de la Ley General.*

(...)

(...)

### **Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales**

“(...)

#### **Artículo 440.**

*1. Las leyes electorales locales deberán considerar las reglas de los procedimientos sancionadores, tomando en cuenta las siguientes bases:*

(...)

**e)** *Reglas para el procedimiento ordinario de sanción por los Organismos Públicos Locales de quejas frívolas, aplicables tanto en el nivel federal como local, entendiéndose como por tales:*

*I. Las demandas o promociones en las cuales se formulen pretensiones que no se pueden alcanzar jurídicamente, por ser notorio o evidente que no se encuentran al amparo del derecho;*

*II. Aquellas que refieran hechos que resulten falsos o inexistentes de la sola lectura cuidadosa del escrito y no se presenten las pruebas mínimas para acreditar su veracidad;*

*III. Aquellas que se refieran a hechos que no constituyan una falta o violación electoral, y*

*IV. Aquellas que únicamente se funden en notas de opinión periodística o de carácter noticioso, que generalicen una situación, sin que por otro medio se pueda acreditar su veracidad.*

(...)”

**Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de  
Fiscalización**

*“Artículo 32.  
Sobreseimiento*

*1. El procedimiento podrá sobreseerse cuando:*

*(...)*

*II. Admitida la queja se actualice alguna causal de improcedencia.*

De lo anterior, se desprende que la frivolidad de los hechos denunciados constituye una causal de improcedencia del procedimiento sancionador en materia de fiscalización. En tal sentido, resulta de capital relevancia el análisis de dicha causal, misma que fuera invocada por el Partido Morena en su escrito de presentación de alegatos de fecha veintitrés de agosto de dos mil dieciocho.

En este orden de ideas y a efecto de ilustrar de manera clara la actualización o no de las hipótesis normativas antes citadas, es necesario precisar que los conceptos de denuncia referidos en el escrito de queja referido con anterioridad son los siguientes:

- La entrega por parte del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave de \$2,500,00.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) mensuales con motivo de la celebración de un Convenio con los pobladores del Municipio de Tatahuicapan, Veracruz.
- La financiación de gastos correspondientes a procesos electorales por parte del Partido Morena por parte del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a través de la entrega a dicho instituto político de los recursos obtenidos con motivo de la celebración de un convenio entre esta entidad y un grupo de personas de Tatahuicapan, Veracruz.

En dicho documento, el partido actor solicitó que se indagaran los presuntos hechos antes señalados, aportando como pruebas los medios de convicción referidos en el numeral II de los Antecedentes de la presente Resolución, mismos que constan de diversas notas periodísticas, así como videos y páginas de internet; todos los cuales, a dicho del denunciante, acreditarían una probable conducta de aportación de un ente impedidos para tal actividad.

En esa tesitura, es menester contrastar las características de lo presentado por el quejoso con aquellas señaladas en la causal de improcedencia en comento con la finalidad de verificar si la misma se actualiza en el caso que nos ocupa, lo que se expone a continuación:

**a)** Por cuanto hace al requisito señalado en la fracción I del inciso e), numeral 1, del artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, es preciso señalar que la misma no se actualiza, en atención a que los hechos denunciados tienen por finalidad el ejercicio de las atribuciones conferidas por la normatividad a la Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral, mismas que se encuentran contenidas en los artículos 192, numerales 1 y 2; 196, numeral 1 y 199, numeral 1 incisos a) y c) de la ley antes señalada; por versar los mismos sobre el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos.

**b)** Por lo que respecto al requisito señalado en la fracción II, es importante destacar que el denunciante ofreció diversos medios de convicción a efecto de acreditar su dicho, mismos que fueron relacionados y corroborados merced a las diversas diligencias realizadas por la autoridad fiscalizadora de manera previa a la admisión del procedimiento de mérito, motivos por los cuales se considera que no se actualiza el requisito referido con anterioridad.

**c)** Respecto al requisito contenido en la fracción III del artículo en comento, y como ya se expuso en el inciso a) del presente considerando, los hechos denunciados por el quejoso en su escrito de mérito se relacionan con el origen, monto, destino y aplicación de los recursos de los partidos políticos, motivo por el cual los mismos constituyen potenciales infracciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización. En tal sentido, no se actualiza la hipótesis referida.

**d)** Por lo que hace al requisito indicado en la fracción IV del artículo en comento, se considera que el mismo no se cumple, toda vez que los medios de prueba aportados por el quejoso, si bien en su mayoría constituyen artículos periodísticos, no constituyen generalizaciones respecto de los hechos denunciados, máxime que muchas de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en ellos descritos pudieron ser verificados merced a las diligencias realizadas de manera previa a la admisión del procedimiento que nos ocupa.

En virtud de lo anterior, resulta claro que no se cumplen con las condiciones establecidas en el artículo 440 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos



Electorales a efecto de tener por cierto que los hechos denunciados deban ser considerados como frívolos y que, por tanto, se actualice la causal de improcedencia establecida en el diverso artículo 30, numeral 1, fracción II del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

Consecuentemente, y toda vez que no se actualiza la causal de improcedencia esgrimida por el partido incoado en su escrito de alegatos ni se advierte la actualización de ninguna diversa, lo conducente es la continuación del análisis de los hechos denunciados y la valoración de los medios de convicción obtenidos por virtud de la substanciación del procedimiento que por esta vía se resuelve.

**4. Estudio de Fondo.** Que una vez fijada la competencia y al no existir cuestiones de previo y especial pronunciamiento, resulta procedente fijar el fondo, materia del presente procedimiento.

De la totalidad de los documentos y las actuaciones que integran el expediente en que se actúa, se desprende que el **fondo del presente asunto** consiste en determinar si el Partido Morena recibió y utilizó aportaciones prohibidas por parte del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con motivo de la celebración de un convenio entre esta entidad y un grupo de personas de Tatahuicapan, Veracruz, entregado estos últimos los recursos otorgados al instituto político incoado.

En este sentido, debe determinarse si los sujetos obligados incumplieron con lo dispuesto en los artículos 25 numeral 1, inciso i), relacionados con el 54 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; así como el artículo y 121 del Reglamento de Fiscalización, que a la letra señalan:

#### **Ley General de Partidos Políticos**

“(…)

##### **Artículo 25.**

*1. Son obligaciones de los partidos políticos:*

(…)

*i) Rechazar toda clase de apoyo económico, político o propagandístico proveniente de extranjeros o de ministros de culto de cualquier religión, así como de las asociaciones y organizaciones religiosas e iglesias y de cualquiera de las personas a las que las leyes prohíban financiar a los partidos políticos;*

(...)

**Artículo 54.**

*1. No podrán realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos ni a los aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o en especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia:*

*a) Los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades federativas, y los ayuntamientos, salvo en el caso del financiamiento público establecido en la Constitución y esta Ley;*

*b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, centralizada o paraestatal, y los órganos de gobierno del Distrito Federal;*

(...)”

**Reglamento de Fiscalización**

**Artículo 121.**

***Entes impedidos para realizar aportaciones***

*1. Los sujetos obligados deben rechazar aportaciones o donativos, en dinero o en especie, préstamos, donaciones, condonaciones de deuda, bonificaciones, descuentos, prestación de servicios o entrega de bienes a título gratuito o en comodato de los siguientes:*

*a) Los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación y de las entidades, así como los ayuntamientos.*

*b) Las dependencias, entidades u organismos de la Administración Pública Federal, estatal o municipal, así como los del Distrito Federal.*

(...)”

De las premisas normativas se desprende que los sujetos obligados tienen la obligación de informar a la autoridad fiscalizadora electoral el origen de los recursos que se hayan destinado para financiar los gastos realizados para el sostenimiento de sus actividades, mismos que deberán estar debidamente registrados en su contabilidad, acompañando la totalidad de la documentación soporte dentro de los plazos establecidos por la normativa electoral.

Asimismo, el órgano fiscalizador tiene la facultad de solicitar en todo momento a los órganos responsables de finanzas de los partidos políticos la documentación correspondiente a las aportaciones e ingresos que reciban los sujetos obligados, con la finalidad de verificar que los mismos se encuentren debidamente reportados.

En este sentido, el cumplimiento de esta obligación permite al órgano fiscalizador verificar el adecuado manejo de los recursos que los institutos políticos reciban. En congruencia a este régimen de transparencia y rendición de cuentas, debe tomarse en cuenta que, para que efectivamente los partidos políticos cumplan con la obligación de reportar ante la autoridad fiscalizadora sus ingresos, es fundamental que presenten toda aquella documentación comprobatoria que soporte la licitud de sus operaciones. Lo anterior, para que la autoridad fiscalizadora tenga plena certeza de que cada partido político, al recibir recursos lo hacen dentro del marco constitucional y legalmente permitidos.

Para tener certeza de que los partidos políticos cumplen con la obligación señalada con anterioridad, se instauró todo un sistema y procedimiento jurídico para conocer tanto el ingreso como los gastos llevados a cabo por los sujetos obligados, de esta manera, dichos entes tienen la obligación de reportar ante esta autoridad electoral y cada uno de los ingresos y gastos erogados por concepto de las actividades antes indicadas.

Asimismo, y por cuanto hace a lo dispuesto en el artículo 25, numeral 1, inciso i), con relación al artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos y 121 del Reglamento de Fiscalización, se establece la obligación por parte de los sujetos obligados de rechazar cualesquiera aportación de las personas expresamente establecidas en dicha normativa, disposición que tiene una relación directa con el artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos, el cual establece un catálogo de personas a las cuales la normativa les establece la prohibición de realizar aportaciones o donativos a los partidos políticos, aspirantes, precandidatos o candidatos a cargos de elección popular, en dinero o especie, por sí o por interpósita persona y bajo ninguna circunstancia.

La prohibición de realizar aportaciones en favor de partidos políticos provenientes de entes prohibidos, existe con la finalidad de evitar que los partidos políticos como instrumentos de acceso al poder público estén sujetos a intereses privados alejados del bienestar general, como son los intereses particulares de personas morales.

En el caso concreto, la prohibición de recibir aportaciones en efectivo o en especie de entes no permitidos responde a uno de los principios inspiradores del sistema de

financiamiento partidario en México, a saber, la no intervención de los sujetos previstos en el citado artículo 54, numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; esto es, impedir cualquier tipo de injerencia de intereses particulares en las actividades propias de los partidos políticos, pues el resultado sería contraproducente e incompatible con el adecuado desarrollo del Estado Democrático.

Por lo anterior, es razonable que por la capacidad económica que un ente no permitido pudiera tener y por los elementos que podrían encontrarse a su alcance según la actividad que realicen, se prohíba a dichos sujetos realizar aportaciones a los partidos políticos.

Es evidente que una de las finalidades que persigue la norma al señalar como obligación de los partidos políticos rendir cuentas ante la autoridad fiscalizadora de manera transparente, es inhibir conductas que tengan por objeto y/o resultado impedir el adecuado funcionamiento de la actividad fiscalizadora electoral, en efecto, la finalidad es precisamente garantizar que la actividad de dichos entes políticos se desempeñe en apego a los cauces legales.

En este sentido cabe decir, que la prohibición configurativa de la infracción típica básica (recibir una aportación en dinero o especie) deriva la proscripción subordinada o complementaria conforme a la dogmática aplicable, dirigida a los partidos políticos atinente a que se deben abstener de aceptar toda clase de apoyo proveniente de cualquier persona a la que les está vedado financiarlos.

Consecuentemente, a fin de verificar si se acreditan los supuestos que conforman el fondo del presente asunto, de conformidad con el artículo 21, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, deberán analizarse, adminicularse y valorarse cada uno de los elementos de prueba que obran dentro del expediente, de conformidad con la sana crítica, la experiencia, las reglas de la lógica y los principios rectores de la función electoral.

Ahora bien, es importante señalar que el trece de marzo de dos mil diecisiete, se recibió en la Unidad Técnica de Fiscalización el oficio emitido por el Titular de la Unidad Técnica de lo Contencioso Electoral, mediante el cual remite el escrito de queja presentado por el Representante Suplente del Partido de la Revolución Institucional ante el Consejo General del Instituto Electoral Nacional, en contra del instituto político Morena y otros; por el cual hace del conocimiento hechos presumiblemente violatorios a la normatividad electoral en materia de fiscalización, atribuibles a los sujetos incoados.

En razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar un análisis al contenido del escrito mencionado, respecto de la totalidad de los conceptos denunciados, que a dicho del quejoso constituyen violaciones a la normatividad electoral en materia de fiscalización, para lo cual aportó diversos medios de prueba a efecto de acreditar sus pretensiones, denunciando lo siguiente:

1. La celebración de un Convenio en el año dos mil catorce, por parte del Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave con un grupo de personas de Tatahuicapan, Veracruz, con el fin de otorgarles dos punto cinco millones de pesos mensuales en dinero en efectivo durante dos años, a efecto de que dichas personas no impidieran el abasto de agua de la “Presa Yuribia” a Coatzacoalcos, Veracruz, refiriendo que la celebración de dicho Convenio se utilizó como subterfugio para destinar el monto señalado al Partido Morena a través de sus dirigentes.
2. Con motivo de lo anterior, se denuncia también el supuesto incumplimiento por parte de Morena de sus obligaciones en materia de fiscalización, en específico de recibir y utilizar aportaciones de entes prohibidos por la normativa electoral, al pretendidamente haber recibido recursos provenientes del Gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave para su utilización en procesos electorales.

Una vez precisado lo anterior, resulta fundamental señalar que las pretensiones del quejoso, a su dicho, violatorias de la normatividad electoral en materia de fiscalización, se sustentan en diversas páginas de internet y videos; medios de convicción que por su naturaleza constituyen pruebas técnicas en términos de lo dispuesto en el artículo 17, numeral 1 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

En razón de lo anterior, es necesario señalar que, a las pruebas técnicas, así como a las documentales privadas, se le otorga un valor indiciario, de acuerdo a lo establecido por el artículo 21 numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

Así, el quejoso documenta su pretensión con las pruebas técnicas consistentes en páginas de internet y videos, medios de prueba que se encuentran incluidos en el

escrito de queja, y que presuntamente evidencian las conductas materia de denuncia.<sup>8</sup>

Es necesario recalcar que el quejoso detectó la supuesta aportación de ente prohibido, específicamente por notas periodísticas y videos extraídos de diversos sitios de internet, en razón de lo anterior, esta autoridad procedió a realizar una búsqueda de los links presentado por el quejoso obteniendo como resultado que 8 de los 9 links no se encontraban disponibles.

Así las cosas, esta autoridad procedió a analizar la procedencia del escrito remitido, advirtiendo la necesidad de reunir mayores elementos previos a una posible admisión del mismo, ello de conformidad con lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización.

En esa tesitura, mediante Acuerdo de fecha dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, la Unidad Técnica de fiscalización determinó tener por recibido el escrito de queja, formar el expediente INE/Q-COF-UTF/37/2017 y girar sendos oficios a las autoridades correspondientes a efecto de allegarse mayores elementos, así como notificar al Secretario Ejecutivo del Consejo General de este Instituto el acuerdo en comento.

De igual forma, y a efecto de allegarse de mayores elementos, se requirió al Director General de la Comisión del Agua de Veracruz, información relativa a un Convenio relacionado con la “Presa Yuribia”; solicitud que fue atendida el diez de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio FOPE09/CAEV/DG/01/2017/193, mediante el cual el Encargado de la Unidad Jurídica de la Comisión del Agua del estado de Veracruz

---

<sup>8</sup> Resulta fundamental determinar el alcance que pueden tener las pruebas técnicas ofrecidas por el quejoso, para acreditar y probar la pretensión formulada. Al efecto, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se ha pronunciado en diversas ocasiones respecto del alcance de las pruebas técnicas para demostrar los hechos que contienen. En este sentido, la Jurisprudencia 4/2014 de rubro “**PRUEBAS TÉCNICAS. SON INSUFICIENTES, POR SÍ SOLAS, PARA ACREDITAR DE MANERA FEHACIENTE LOS HECHOS QUE SE CONTIENEN**”, emitida por dicho tribunal electoral, señala que es posible que se ofrezcan este tipo de pruebas. Sin embargo, dada la naturaleza de las mismas, es decir, su carácter imperfecto, toda vez que son susceptibles de modificación, alteración o falsificación con relativa facilidad, por lo que resultan insuficientes por sí solas para acreditar fehacientemente los hechos que contienen.

En este sentido, para dotar de mayor solidez a las pruebas técnicas que se ofrezcan, es necesario que se acompañen de una descripción precisa de los hechos y circunstancias que se pretenden demostrar. Así, resulta imprescindible que el aportante identifique personas, lugares, así como las circunstancias de modo y tiempo que tenga como resultado la exposición de una descripción detallada de lo que es posible apreciar con la reproducción de la prueba técnica. De tal suerte, la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación en la Jurisprudencia 36/2014 de rubro “**PRUEBAS TÉCNICAS. POR SU NATURALEZA REQUIEREN DE LA DESCRIPCIÓN PRECISA DE LOS HECHOS Y CIRCUNSTANCIAS QUE SE PRETENDEN DEMOSTRAR**”, señala que la descripción que presente el oferente debe guardar relación con los hechos por acreditar, por lo que el grado de precisión en la descripción debe ser proporcional a las circunstancias que se pretenden probar.

Es importante insistir en el alcance de las pruebas técnicas con base en los criterios sustentados por la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación toda vez que, el quejoso parte de una premisa errónea al pretender tener por acreditados los hechos materia de denuncia únicamente merced a videos, y páginas de internet, toda vez que, como ya se dijo, las mismas constituyen únicamente indicios.

de Ignacio de la Llave señaló que no tiene conocimiento de la celebración de algún convenio y dentro de los archivos que integran su Dirección no encontró ningún Convenio relacionado con la “Presa Yuribia”, manifestaciones que fueron reiteradas mediante el diverso oficio FOPE09/CAEV/DG/01/2017/298.

En esa tesitura, el dieciséis de marzo de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DRN/2715/2017, se requirió a la Delegada de la Secretaría de Desarrollo Social en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de que brindara información relativa a si tenía conocimiento de la Celebración del Convenio en comento.

Así, el treinta y uno de marzo de dos mil diecisiete, mediante el oficio número 150.FI.152.0133, la servidora pública declaró su desconocimiento sobre la existencia de algún Convenio relacionado con la “Presa Yuribia”, precisando que la formalización del convenio que se señala no está dentro de las atribuciones conferidas al cargo.

Continuando con la línea de investigación trazada, el dieciséis de marzo, cuatro de abril y trece de diciembre de dos mil diecisiete, por medio de los oficios INE/UTF/DRN/2718/2017, INE/UTF/DRN/3626/2017 e INE/UTF/DRN/18977/2017, se le requirió al Secretario de Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, a efecto de que brindara información respecto del posible Convenio relativo a la “Presa Yuribia”.

En ese sentido, el veintiocho de marzo y veinticuatro de abril de dos mil diecisiete, se recibieron en la Unidad Técnica de Fiscalización, respectivamente, los oficios número SG/DGJ/1573/03/2017 e SG-DGJ/1989/04/2017, mediante los cuales, el funcionario público refirió que desconoce el convenio, en virtud de que el cargo de Secretario de Gobierno fue asumido el día primero de diciembre de dos mil dieciséis, fecha en que dio inicio una nueva administración, asimismo establece que continuará con la búsqueda de la información solicitada.

Con motivo de lo anterior, el dieciséis de marzo y veinticinco de abril de dos mil diecisiete, por medio de los oficios INE/UTF/DRN/2717/2017 e INE/JD20-VER/0535/2018, se requirió al Presidente Municipal de Tatahuicapan de Juárez en el estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, con el propósito de que brindara información respecto de los hechos denunciados, en específico, respecto de la celebración del Convenio, sus alcances y fines.

El treinta de marzo y quince de mayo, ambos de dos mil diecisiete, se recibieron en la Unidad Técnica de Fiscalización los oficios número 00100/PDCIA/2017 y PRESI/TATA/0176/2018, por los que se atienden los requerimientos formulados, en los que sustancialmente refiere que desconoce el Convenio, no obstante, lo anterior aporta el nombre de diversos ciudadanos que encabezan el Órgano Ejidal de dicha localidad a efecto de requerirlos para mayor información.

Así las cosas, el cuatro de abril de dos mil diecisiete, por medio del oficio INE/UTF/DRN/3624/2017, esta autoridad solicitó al Vocal Ejecutivo de la Junta Local Ejecutiva del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave la aplicación de un cuestionario a los CC. Calixto Cruz Martínez, Isaías Landa Domínguez, Inocente Bautista Luis y Félix Hernández González; todos en su carácter de autoridades ejidales del Municipio de Tatahuicapan de Juárez, para que informaran sobre la realización de supuestos convenios de pago celebrados entre habitantes de la localidad de Tatahuicapan de Juárez y los funcionarios denunciados y de cuyas respuestas fue posible allegarse de mayor información y documentos, entre los cuales figura una copia del Convenio antes referido, que permitieron a la autoridad instructora determinar la admisión e inicio del procedimiento de mérito, es importante señalar que dos ciudadanos presentaron ante esta autoridad el Convenio denunciado.

Una vez realizadas las diligencias preliminares que la autoridad fiscalizadora consideró pertinentes, y toda vez que esta autoridad contaba con todos los elementos necesarios para la admisión del procedimiento de mérito, el veintisiete de abril de dos mil diecisiete, se determinó admitir a trámite, ordenando notificar al Presidente de la Comisión de Fiscalización y al Secretario Ejecutivo del Consejo General del Instituto Nacional Electoral, así como al Partido Morena el referido acuerdo, ordenando que el mismo se publicase en estrados.

En razón de lo anterior, resulta fundamental señalar que la pretensión del quejoso es acreditar la posible aportación de ente prohibido, a través de la existencia del Convenio celebrado por el Gobierno del estado de Veracruz con diversas personas de Tatahuicapan de Juárez, en razón de su celebración fueron destinados recursos públicos al Partido Morena.

Una vez precisado lo anterior, a continuación, se realiza el estudio de fondo de las conductas denunciadas, en los apartados siguientes:



- **A. Convenio celebrado entre diversos funcionarios del Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave y representantes ejidales, ejidatarios y pobladores de Tatahuicapan de Juárez.**
- **B. Supuesta entrega de recursos por parte del Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave a representantes ejidales, ejidatarios y pobladores de Tatahuicapan de Juárez.**
- **C. Posible vínculo de representantes ejidales, ejidatarios y pobladores de Tatahuicapan de Juárez y el Partido Morena.**

**A. Convenio celebrado entre diversos funcionarios del Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave y representantes ejidales, ejidatarios y pobladores de Tatahuicapan de Juárez.**

El presente apartado de estudio se abocará, en primer lugar, a analizar la existencia del Convenio celebrado entre diversos funcionarios del Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave y representantes ejidales, ejidatarios y pobladores de Tatahuicapan de Juárez, en la entidad antes referida (en adelante “el Convenio”), en razón del cual, a decir del quejoso, fueron otorgados recursos por el Gobierno de Veracruz cuya finalidad real fue el financiamiento del Partido Morena.

En razón de lo anterior, una vez establecida la línea de investigación a desarrollar y dentro de las diligencias practicadas por esta autoridad administrativa electoral para allegarse de elementos que le permitieran generar convicción en relación a los hechos denunciados, se procedió a realizar la valoración de las pruebas aportadas por el quejoso encaminadas a probar los hechos descritos en su escrito de mérito, mismos que consisten en pruebas técnicas consistentes en páginas de internet, y videos, mismos que se detallan como sigue:

- **Páginas de internet y videos**

Son nueve páginas de internet aportados por el quejoso como medio de prueba, es decir, cuatro notas periodísticas y cinco videos, cuya existencia y contenido fue objeto de las diversas razones y constancias, obteniendo como resultado que solamente una nota periodística se encuentra en el portal señalado por el quejoso mientras que las restantes es imposible detectar su contenido, toda vez que el link no permite abrir las notas ni los videos señalados.

Del análisis practicado a los medios de prueba referidos, no es dable concluir que los mismos hagan referencia o den constancia de los hechos denunciados, en específico, a la celebración del convenio antes señalado y el destino de los recursos otorgados en razón de este al Partido Morena.

Asimismo, es importante señalar que las pruebas técnicas cuyo análisis y contenido se estudió con anterioridad no resultan idóneas a efecto de generar certeza respecto de las circunstancias de modo, tiempo y lugar en relación con los hechos que con ellas se pretenden acreditar, pues aún y cuando hubiera sido posible para esta autoridad allegarse del contenido de los medios de prueba expuestos por el quejoso, no se tiene certeza de que dichas imágenes, notas, videos y links de internet hayan sido producidos durante el desarrollo de los hechos denunciados, en el contexto de modo y lugar que el oferente señala.

En esa tesitura, tal y como se ha señalado en los párrafos que anteceden y de conformidad con lo establecido en el artículo 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, los medios antes señalados únicamente poseen valor indiciario, por lo que por sí mismos no es dable que generen la suficiente convicción como para tener acreditados los hechos relacionados.

- **Documental privada**

Ahora bien, por cuanto hace a la prueba documental ofrecida por el quejoso consistente en el Convenio referido con anterioridad, se destaca que dicho medio de convicción fue enunciado por el quejoso; sin embargo, el mismo no fue presentado.

No obstante, lo anterior, la autoridad instructora realizó diversos requerimientos de información, para poder allegarse del convenio denunciado.

En un primer momento, se solicitó información al Director General de la Comisión del Agua, la Delegada de Desarrollo Social y el Secretario de Gobierno, todos ellos funcionarios del Gobierno del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, así como al Presidente Municipal de Tatahuicapan de Juárez, a efecto de que confirmaran la existencia del Convenio, proporcionaran información respecto del mismo y, en su caso, allegaran a esta autoridad dicho documento.

En atención a los mencionados requerimientos, el Director General de la Comisión del Agua, la Delegada de Desarrollo Social y el Secretario de Gobierno, señalaron

en sus respectivas contestaciones no tener conocimiento de la celebración del Convenio ni contar con información o documentación respecto al mismo.

Ahora bien, siguiendo con la línea de investigación trazada, esta autoridad tuvo conocimiento de un Procedimiento Ordinario Sancionador del Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz bajo el número de expediente CG/SE/POS/PRI/004/2017, mismo que había sido resuelto mediante Acuerdo OPLEV/CG245/2017 de fecha seis de septiembre de dos mil diecisiete; cuya litis guarda relación con la materia del presente procedimiento, pues en él fueron analizados hechos consistentes en “el indebido financiamiento a MORENA, así como el indebido uso de recursos públicos por parte del Gobierno de Veracruz”, esto con motivo de la celebración del Convenio materia de análisis.

En razón de lo anterior, la autoridad fiscalizadora procedió a solicitar al Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz copia certificada de las constancias que integran el expediente del Procedimiento Ordinario Sancionador señalado, solicitando se informara si el Acuerdo por el que se resolvió dicho procedimiento se encontraba firme o había sido impugnado.

Así, mediante oficio OPLEV/SE/8034/2017, el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz remitió las constancias e información solicitadas, de las cuales se advierte que el procedimiento sancionador en comento se declaró infundado toda vez que de la investigación realizada por el organismo electoral y el cúmulo probatorio aportado por el quejoso no fue posible acreditar la existencia del Convenio celebrado entre el Gobierno del estado de Veracruz y los pobladores de Tatahuicapan.

No obstante, lo anterior, dentro de las constancias remitidas por dicho organismo electoral esta autoridad advirtió la existencia de una contestación de fecha diecinueve de julio de dos mil diecisiete, efectuada por el entonces Subsecretario de Gobierno del Estado de Veracruz, el C. Marlon Eduardo Ramírez Marín, misma que se transcribe a continuación en su parte conducente:

“(…)

*En el marco de las atribuciones precitadas y bajo protestas de decir verdad, NIEGO ROTUNDAMENTE que el suscrito en mi carácter de subsecretario y/o por propio derecho, haya convenido con el partido MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL otorgarle cantidad alguna de dinero, pues lo cierto es que con la única finalidad de regular el suministro de Agua potable a*

*las ciudades de COATZACOALCOS, MINATITLA Y COSOLEACAQUE del estado de Veracruz, en el año que refiere el denunciante y en otras ocasiones, el gobierno del Estado a través de la Secretaría de Gobierno, y con la finalidad de no violentar lo derechos fundamentales de los habitantes del Ejido de Tatahuicapa en cuyo territorio se encuentra la represa “YURIBIA” cuyas instalaciones tenían tomadas los ejidatarios en demanda del cumplimiento de diversos ofrecimientos hechos por Gobiernos anteriores, consistentes en apoyos económicos para beneficio de dicha comunidad a cambio de permitir el libre abasto de agua a las ciudades precitadas, celebramos diversos acuerdos y convenios con los habitantes de Tatahuicapan y es posible que dentro de ellos podría estar el que refiere el actor, pero que desconozco en contenido y firma por no haberse anexado al escrito de demanda; (sic)*

*En el supuesto caso de ser cierto que suscribí el convenio que afirma el actor, estoy seguro y afirmo que siempre por instrucciones del Ejecutivo del Estado y de mi superior jerárquico celebre (sic) acuerdos y convenios con el supremo objetivo de resolver conflictos y en el caso particular que nos ocupa, con los precitados ejidatarios; Ello, para destrabar el bloqueo y regularizar el servicio de agua potable en la zona afectada, pero es falso y se niega, que el suscrito haya contraído compromiso económico alguno en nombre y representación del Gobierno del Estado a través de la subsecretaría General de Gobierno con el partido político MORENA (MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL).*

### CONTESTACIÓN DE HECHOS

*Por cuanto a los hechos que se sustentan la denuncia que contesto, en lo general son falsos y se niegan, y en relación con el hecho número CINCO que refiere la celebración del convenio multicitado reitero: Jamás celebré convenio alguno con el partido político denominado MOVIMIENTO DE REGENERACIÓN NACIONAL ni con los ejidatarios de Tatahuicapan estado de Veracruz para beneficiar a MORENA ni a ninguna otra organización política; Lo cierto es, que con estricto apego a la normatividad que regula las funciones de la subsecretaría, todos mis actos en el ejercicio del encargo que me fue conferido por el Gobierno del Estado frente a la Subsecretaría General de Gobierno, fueron realizados con la finalidad de procurar la gobernabilidad del Estado y preservar la paz social en toda la entidad Federativa, privilegiando siempre el diálogo antes de hacer uso de la fuerza pública y ese pudo haber sido el caso de la toma de la represa “Yuribia”, pues es y ha sido siempre del dominio público que a pesar de que los ejidatarios aludidos, son los beneficiarios de los recursos naturales inmersos en su ejido, bajo diversos acuerdos tomados por los gobiernos precedentes, han permitido que el suministro de agua potable a COATZACOALCOS, MINATITLAN Y COSOLOAQUE, emane de las aguas que*

*tienen su origen en el territorio ejidal que les fue asignado por el Gobierno Federal Y SIEMPRE HAN EXIGIDO algunos beneficios para su comunidad, resultando injusto en caso de haberse concretado el convenio de referencia, que para desalojar a los ocupantes de la represa antes aludida, en lugar de utilizar el diálogo con los ejidatarios como en efecto posiblemente se hizo, se hubiese utilizado la fuerza del Estado, y ello justificaría en cualquier caso la celebración del convenio, pero reitero, mis actos de gobierno siempre fueron hechos con la finalidad de procurar justicia social y política, privilegiando de manera institucional, los derechos fundamentales de los ciudadanos involucrados.*

*(...)*”

**[énfasis añadido]**

Derivado de lo antes transcrito es posible advertir que si bien el entonces Subsecretario de Gobierno del estado de Veracruz niega la existencia de aportaciones por parte del Gobierno de Veracruz al Partido MORENA, también es cierto que admite la posibilidad de haber suscrito el Convenio cuya existencia es motivo de análisis, máxime que refiere la existencia de diversos antecedentes celebrados con motivo de la inconformidad expresada por los pobladores de Tatahuicapan, circunstancia que resulta indiciaria respecto de la celebración del Convenio de referencia.

No obstante, lo anterior, es preciso señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la información y documentación remitida por el Organismo Público Local Electoral del estado de Veracruz, constituyen documentales públicas con pleno valor probatorio, por lo que generan convicción respecto de los hechos con ellas relacionados.

Aunado a lo anterior, como parte de la respuesta emitida por el Presidente Municipal de Tatahuicapan de Juárez, se advierte que el mismo reconoce la existencia de un Convenio celebrado entre el Gobierno de Veracruz y los habitantes del Municipio de Tatahuicapan, en específico por diversas autoridades ejidales de dicha demarcación, refiriendo que la autoridad a su cargo no tuvo participación alguna en la celebración del mismo y desconoce el destino de los recursos otorgados por este.

A continuación, se transcribe, en su parte conducente y para mayor prontitud en su consulta, la respuesta referida:

“(…)

1. En el mes de Marzo (sic) de 2014, un grupo de Ejidatarios y cientos de avecindados de Tatahuicapan se organizaron e hicieron varias reuniones en la comisaría Ejidal para protestar y solicitar al Gobierno del Estado de Veracruz y el Gobierno municipal de Coatzacoalcos la LIBERACIÓN DEL RIO(sic) TEXIZAPAN Y TECOMAXOCHAPAN DE LA PRESA YURIBIA, EN VIRTUD DE QUE VARIOS PRODUCTORES SE MANIFESTARON POR LA CONTAMINACIÓN Y LA DISMINUCIÓN DE LA CORRIENTE DE AGUA DEL RÍO TEXIZAPAN QUE YA NO ERA SUFICIENTE PARA LOS CULTIVOS NI PARA EL GANADO POR LA SITUACIÓN DE ESTIAJE DE LA TEMPORADA.

2. El Gobierno del estado hizo caso omiso a esta protesta social y provocó que los campesinos y avecindados tomaran la Presa Yuribia en abril del 2014, manifestándose por la falta de una respuesta favorable para resolver sus peticiones.

3. La toma de las instalaciones de la PRESA YURIBIA provocó que varios días dejaran sin abasto de agua a los habitantes de Coatzacoalcos, con esta manifestación social funcionarios del gobierno del estado de Veracruz dialogaron con los ejidatarios y avecindados de Tatahuicapan y se comprometieron a realizar la Construcción de un Hospital, la rehabilitación de los caminos cosecheros en el ejido de Tatahuicapan.

**Otorgar un subsidio económico por la cantidad de 2.5 MILLONES DE PESOS EN APOYO PARA LOS EJIDATARIOS Y AVECINDADOS,** propusieron dar un plazo de seis meses al municipio de Coatzacoalcos para que buscarán otra fuente de abastecimiento de agua para la ciudad, por motivos de liberar el Río (sic) Texizapan de la contaminación de las sustancias tóxicas que arroja las instalaciones de la Presa Yuribia que afecta los ecosistemas y especies acuáticos.

4. **En diciembre del 2014,** en Reunión en la comisaría Ejidal de Tatahuicapan, donde el gobierno del estado de Veracruz, no estuvo de acuerdo en la liberación del Río (sic) Texizapan por la necesidad del agua para los habitantes de Coatzacoalcos. Situación que molestó a los ejidatarios y avecindados y volvieron a tomar la presa Yuribia por varios días, radicalizaron el movimiento y a finales del mes de diciembre del 2014.el (sic) **Gobierno del Estado de Veracruz acordó con los Ejidatarios y Avecindados así como las AUTORIDADES DEL EJIDO DE TATAHUICAPAN Y LOS INTEGRANTES DEL COMITÉ DE CUENCA DEL RIO (sic) TEXIZAPAN: A) DAR INICIO LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL, B). OTORGAR EL SUBSIDIO ECONOMICO (sic) MENSUAL, POR LA CANTIDAD DE 2.5 MILLONES DE**

**PESOS EN APOYO PARA LOS EJIDATARIOS Y AVECINDADOS PARA LOS SIGUIENTES AÑOS. C) REGULAR EN LA PRESA YURIBIA EL ABASTO DE AGUA DEL RIO(sic) TEXIZAPAN. 40% PARA LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE COATZACOALCOS Y 60% PARA LAS PARCELAS EN APOYO PARA LOS CULTIVOS Y PRODUCTORES DE GANADO.**

5. PARA SEGUIR ABASTECIENDO DE AGUA A LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE COATZACOALCOS EL GOBIERNO DEL ESTADO DE VERACRUZ ENTREGABA MENSUALMENTE EL SUBSIDIO ECONOMICO(sic) A LAS AUTORIDADES DEL EJIDO DE TATAHUICAPAN Y EL COMITÉ DE CUENCA DEL RIO (sic) TEXIZAPAN, Y ATRAVES(sic) DE ELLOS HACIAN ENTREGA A LOS EJIDATARIOS Y AVECINDADOS. NO TENEMOS CONOCIMIENTO SI ALGUN (sic) PARTIDO POLITICO (sic) RECIBIERA ESOS APOYOS

6. **Acuerdos que tuvo sus efectos hasta el 28 de diciembre de 2016, en virtud que el nuevo gobierno estatal ya no otorgó el subsidio por los problemas económicos en que se encuentra el estado de Veracruz.** Los compromisos del gobierno estatal del C. JAVIER DUARTE DE OCHOA no se cumplieron en su totalidad para el ejido de Tatahuicapan.

7. HUBO RUMORES DE CONVENIOS ESCRITOS PERO NOSOTROS COMO AUTORIDADES DEL MUNICIPIO DE TATAHUICAPAN DE JUÁREZ DESCONOCEMOS EN VIRTUD DE QUE NO PARTICIPAMOS EN DICHO MOVIMIENTO SOCIAL. PARA MÁS INFORMACIÓN LA DEPENDENCIA A SU CARGO PUEDE SOCILITAR ANTE EL ORGANO (sic) EJIDAL DE TATAHUICAPAN QUE COORDINAN LOS CC. CALIXTO CRUZ MARTINEZ (sic) E ISAIAS (sic) LANDA DOMINGUEZ (sic), COMISARIO EJIDAL Y CONSEJO DE VIGILANCIA, AL C. INOCENTE BAUTISTA LUIS, EXCONSEJO DE VIGILANCIA Y EL COMITÉ DE CUENCA DEL RIO (sic) TEXIZAPAN QUE DIRIGÍA EL C. FELIZ HERNANDEZ (sic) GONZALEZ (sic).

(...)"

La respuesta antes transcrita constituye una documental pública en términos de los artículos 19 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que, al tratarse de un documento elaborado por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones, tiene valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos en ella referidos.

En razón de lo anterior, la autoridad substanciadora procedió a requerir información a los sujetos señalados por el Presidente Municipal como parte de su contestación, esto es, a los integrantes del órgano ejidal, a los CC. Calixto Cruz Martínez,

Presidente del Comisariado Ejidal, Isaías Landa Domínguez, Presidente del Consejo de Vigilancia, Inocente Bautista Luis, Expresidente del Consejo de Vigilancia y Félix Hernández González, Presidente del Comité de la Cuenca del Río Texizapán, todos ellos de Tatahuicapan, Veracruz de Ignacio de la Llave.

En ese sentido, esta autoridad procedió a solicitar apoyo a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, a efecto de que prestara su auxilio para la realización de un cuestionario a los sujetos referidos en el párrafo que antecede, ello con la finalidad de allegarse de mayor información y documentación respecto de los hechos materia de denuncia.

Dichos cuestionarios consistieron en las siguientes preguntas:

1. ¿Tuvo conocimiento de la celebración de un convenio o convenios relacionados con la presa “Yuribia”?
2. De ser afirmativa su respuesta, indique la fecha en que se celebró y la vigencia de dicho acuerdo, así como el carácter que desempeño durante la celebración de dicho convenio.
3. Mencione el nombre de las personas que intervinieron en el acto y, de tener conocimiento, señale si éstas militan en algún partido político.
4. Indique cual fue la finalidad, circunstancias y condiciones de cumplimiento en las que se desarrolló el convenio celebrado.
5. En caso de que el convenio haya consistido en la entrega de apoyo económico por parte del Gobierno de Veracruz a la comunidad de Tatahuicapa de Juárez, indique de qué forma fue aplicado tal apoyo.
6. ¿Qué persona era la responsable de administrar dicho recurso?
7. ¿Durante la vigencia del convenio en comento existieron modificaciones a sus términos? ¿Cuáles fueron?
8. Realice las aclaraciones que estime permitentes, adjuntando copia de aquella documentación que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento.

Realizados los cuestionarios antes referidos, el veinte de abril de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF-VER/004/2017, el Enlace de Fiscalización de la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, remitió las repuestas otorgadas por las personas a las cuales les fueron aplicados, de cuyo análisis se desprende lo siguiente:



**C. Calixto Cruz Martínez, Presidente del Comisariado Ejidal**

El mismo refiere, como contestación a las interrogantes planteadas, que no tiene conocimiento de la celebración del Convenio ni de sus términos. No obstante, refiere conocer que el monto de los recursos otorgados por parte del Gobierno del estado de Veracruz ascendió a \$2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.), precisando que el encargado de administrar dicho recurso era el Comité de la Cuenca del Río Texizapán y proporcionando, además, copia simple del Convenio, mismo que le fuera entregado una vez tomó el cargo en virtud del cual se le realizara el cuestionario antes mencionado.

**C. Isaías Landa Domínguez, Presidente del Consejo de Vigilancia**

Dicha persona refiere en su contestación que no tener conocimiento alguno del Convenio, su motivación, efectos y el origen y destino de los recursos otorgados con su celebración, toda vez que él no estuvo ahí.

**C. Inocente Bautista Luis, Expresidente del Consejo de Vigilancia**

El ciudadano reconoce la existencia del Convenio, su celebración, finalidad y alcances, refiriendo que participó en la firma del mismo como Presidente del Consejo de Vigilancia del Comisariado de Tatahuicapan, señalando que el destino de los recursos otorgados fue la reparación de los caminos del ejido y señalando que el encargado de la administración de dicho recurso era el Comisariado Ejidal. Asimismo, dicha persona señaló que quienes intervinieron en la celebración del Convenio no tienen filiación partidista alguna.

**C. Félix Hernández González, Presidente del Comité de la Cuenca del Río Texizapán.**

Dicha persona reconoce la existencia del Convenio, su celebración, finalidad y alcances, refiriendo que el destino de los recursos otorgados fue la reparación de los caminos del ejido y señalando que el encargado de la administración de dicho recurso era el Comité de la Cuenca del Río Texizapán, proporcionando, además, copia simple del Convenio. Asimismo, dicha persona señaló que quienes intervinieron en la celebración del Convenio no tienen filiación partidista alguna.

Es importante señalar que los sujetos cuestionados no refieren como parte de sus contestaciones que la celebración del convenio o el destino de los recursos obtenidos con motivo de este hayan tenido como destino el financiar actividades del Partido Morena, no desprendiéndose de dichas respuestas vínculo alguno entre dicho instituto político y los hechos y personas referidos.

Asimismo, es importante señalar que derivado de los cuestionamientos realizados, se obtuvieron diversos nombres y cargos de personas que a decir de los entrevistados, desempeñaron tareas con motivo de la administración de los recursos derivados del Convenio o bien tuvieron alguna intervención en la celebración de este; en específico el de los CC. Pascual Lorenzo Ruíz, Presidente del Comisariado Ejidal, Juan Sánchez Hernández, Presidente del Consejo de Vigilancia de la Cuenca del Río Texizapán, Inocente Bautista Luis, Presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido Tatahuicapan de Juárez, Felipe Hernández González, Secretario del Comité de Vigilancia de la Cuenca del Río Texizapán y Evaristo Gonzáles Bautista, Tesorero del Comité de Vigilancia de la Cuenca del Río Texizapán.

Es preciso señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, las pruebas documentales privadas y testimoniales sólo harán prueba plena cuando a juicio de la autoridad generen convicción respecto de los hechos con ellas relacionados al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente.

Continuando con la línea de investigación, esta autoridad estimó conveniente solicitar información al Presidente Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, respecto de los hechos materia de denuncia, solicitud que realizó mediante oficio INE/UTF/DRN/7530/2017 de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecisiete.

En razón de lo anterior, mediante escrito oficio PRES/403/2017, el Presidente Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz, dio contestación a la solicitud de información que le fue dirigida, manifestando medularmente lo siguiente:

- ✓ Que su intervención en la celebración del Convenio fue para efecto únicamente de reestablecer el servicio de agua potable del Municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.
- ✓ Desconoce si el Partido Morena intervino en las negociaciones del Convenio.

- ✓ Refiere que el método de pago de los recursos obtenido en razón del Convenio fue a través de cheque bancario, recurso que posteriormente fue canalizado en efectivo a los habitantes de Tatahuicapan.
- ✓ Manifiesta desconocer si los CC. Pascual Lorenzo Ruíz, Presidente del Comisariado Ejidal, Juan Sánchez Hernández, Presidente del Consejo de Vigilancia de la Cuenca del Río Texizapán, Inocente Bautista Luis, Presidente del Consejo de Vigilancia del Ejido Tatahuicapan de Juárez, Felipe Hernández González, Secretario del Comité de Vigilancia de la Cuenca del Río Texizapán y Evaristo Gonzáles Bautista, Tesorero del Comité de Vigilancia de la Cuenca del Río Texizapán; son militantes de algún partido político.

De lo vertido por el Municipio en su contestación de mérito, se desprende que dicha entidad reconoce haber participado en la celebración del Convenio materia de estudio únicamente para efecto del restablecimiento del servicio de agua potable al Municipio de Coatzacoalcos, señalando desconocer si las personas que sí intervinieron en la celebración de dicho acto son militantes de instituto político alguno.

La respuesta antes señalada constituye una documental pública en términos de los artículos 19 y 21 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, por lo que, al tratarse de un documento elaborado por una autoridad en ejercicio de sus atribuciones, tiene valor probatorio pleno respecto de su autenticidad o de la veracidad de los hechos en ella referidos.

Así las cosas, la autoridad substanciadora procedió a requerir información a los sujetos antes señalados, esto es, a los CC. Pascual Lorenzo Ruíz, Presidente del Comisariado Ejidal, Juan Sánchez Hernández, Presidente del Consejo de Vigilancia de la Cuenca del Río Texizapán, Felipe Hernández González, Secretario del Comité de Vigilancia de la Cuenca del Río Texizapán y Evaristo Gonzáles Bautista, Tesorero del Comité de Vigilancia de la Cuenca del Río Texizapán.

En ese sentido, esta autoridad procedió a solicitar apoyo a la Junta Local Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral en el estado de Veracruz, a efecto de que prestara su auxilio para la realización de un cuestionario a los sujetos referidos en el párrafo que antecede, ello con la finalidad de allegarse de mayor información y documentación respecto de los hechos materia de denuncia.

Realizados los cuestionarios antes referidos, el doce de junio de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/CD21/0156/2017, el Vocal Ejecutivo de la 21 Junta Distrital Ejecutiva del Instituto Nacional Electoral, remitió las repuestas otorgadas por las personas a las cuales fueron aplicados los cuestionarios, de cuyo análisis se desprende lo siguiente:

Dichos cuestionarios consistieron en las preguntas siguientes:

1. Refiera en qué consistió su participación en la celebración del Convenio relativo a la “Presa Yuribia”
2. ¿Cuál fue la finalidad del convenio celebrado?
3. Respecto del convenio señalado y que fue suscrito por usted, mencione si tiene conocimiento que el instituto político Morena intervino en las negociaciones entre los habitantes de la localidad de Tatahuicapan de Juárez y diversos funcionarios del estado de Veracruz de Ignacio de la Llave durante la administración del entonces gobernador del estado, el C. Javier Duarte de Ochoa.
4. ¿Cuál fue el mecanismo para la entrega del recurso a los habitantes de la localidad de Tatahuicapan de Juárez y el grado de cumplimiento del convenio?
5. ¿Qué persona era la responsable de administrar dicho recurso?
6. Indique la temporalidad en que fue recibido ese recurso, especificando las fechas en que fue recibido el apoyo mensual indicado en el convenio.
7. Aclare si este era entregado en efectivo o mediante depósito en cuenta bancaria, señalando en el caso, el nombre de la institución bancaria, número de cuenta y nombre del titular.
8. Señale cómo fue aplicado el apoyo económico en comento.
9. Realice las aclaraciones que estime pertinentes, adjuntando copia de aquella documentación que a su consideración sirva a esta autoridad para esclarecer los hechos materia del presente procedimiento.

Derivado de las interrogantes planteadas, los ciudadanos enlistados precisaron lo siguiente:

**C. Pascual Lorenzo Ruíz, Presidente del Comisariado Ejidal.**

Indica que fue Presidente del Comisariado Ejidal durante la firma del convenio, mismo que se celebró el día cuatro de abril de dos mil catorce, mismo que fue suscrito por el Secretario Municipal de Coatzacoalcos y el Comité nombrado por los vecinos y ejidatarios, sin que hubiese presencia o participación de algún representante político. Precisa que fue el Comité de la Cuenca del Río Texizapán a través del C. Evaristo González

Bautista, quien administraba y realizaba la repartición de los recursos otorgados entre los vecinos y ejidatarios, sin que el requerido cuente con ninguna evidencia de dicho manejo.

**C. Juan Sánchez Hernández, Presidente del Consejo de Vigilancia de la Cuenca del Río Texizapán.**

Indica que fue Presidente del Comité de Vigilancia del Comité de la Cuenca del Río Texizapán durante la firma del Convenio, mismo que tuvo como finalidad el generar un beneficio a Tatahuicapan. Indica que no existió participación ni firma de ningún partido político. Precisa que fue el Comité de la Cuenca del Río Texizapán a través del C. Evaristo González Bautista, quien administraba y realizaba la repartición de los recursos otorgados entre los vecinos y ejidatarios, siendo este último quien cuenta con la documentación comprobatoria de dicho manejo.

**C. Felipe Hernández González, Secretario del Comité de Vigilancia de la Cuenca del Río Texizapán.**

Dicha persona falleció, por lo que no fue posible la aplicación del cuestionario.

**C. Evaristo González Bautista, Tesorero del Comité de Vigilancia de la Cuenca del Río Texizapán.**

El mismo refiere, como contestación a las interrogantes planteadas, que sí tiene conocimiento de la celebración del Convenio y de sus términos, habiendo participado en su suscripción como Tesorero del Comité de Vigilancia de la Cuenca del Río Texizapán. Precisa que el encargado de administrar dicho recurso era el Comité de la Cuenca del Río Texizapán a través de él. Indica que el Convenio fue negociado por representantes de avecinados y ejidatarios, sin haber participado ningún representante político, repartiéndose entre los primeros el recurso otorgado. Proporcionó documentación como Informes de ingresos y egresos, cortes de caja, balances y recibos.

Resulta imperativo precisar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16, numeral 2, fracción I, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la información allegada

por esta autoridad como parte de las respuestas brindadas por los sujetos entrevistados constituyen documentales privadas.

Asimismo, esta autoridad tuvo conocimiento que la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE) se encontraba substanciando la carpeta de investigación número FED/FEPADE/UNAI-VER/0000433/2017, por cargos idénticos a aquellos hechos materia de investigación en el presente procedimiento, motivo por el cual procedió a solicitarle información y documentación relacionada con dicha carpeta de investigación a efecto de que la autoridad fiscalizadora se allegara de mayores elementos de investigación.

No obstante, lo anterior, mediante oficio FEPADE-E-088/2017 de fecha primero de noviembre de dos mil diecisiete, la FEPADE dio contestación a la solicitud planteada en el sentido de indicar que la información correspondiente a la carpeta de investigación señalada es información estrictamente reservada por lo que no fue atendido dicho requerimiento.

Continuando con las indagaciones correspondientes, la autoridad substanciadora requirió de nueva cuenta información respecto del Convenio a la Comisión del Agua del Estado de Veracruz, a efecto de proporcionar el Convenio en cuestión, así como para que informase respecto de su objeto y finalidad.

En virtud de lo anterior, mediante oficio FOPE09/CAEV/DG/01/2017/298, de fecha veintisiete de abril de dos mil diecisiete, la mencionada autoridad dio contestación a dicha solicitud, manifestando que en los archivos de dicha institución no obra documento ni información alguna que respalde la celebración del Convenio que nos ocupa, ni instrumento alguno que estipule lo que medularmente se señala en este.

Asimismo, se procedió a requerir nuevamente información al Secretario de Gobierno del Estado de Veracruz, con la finalidad de que proporcionara documentación e información relacionada con el Convenio materia de análisis.

Es el caso, que mediante oficio número SG-DGJ/1989/04/2017, el Secretario de Gobierno del estado de Veracruz dio contestación a la solicitud que le fuera dirigida, manifestando su desconocimiento respecto de la información requerida, toda vez que la administración de la que forma parte inició labores el día primero de diciembre de dos mil dieciséis, sin que se tenga en los archivos de dicha dependencia, constancia alguna referente a contratos, convenio o acuerdos como aquél cuya información le fuera requerida.

Así las cosas, la autoridad fiscalizadora consideró oportuno requerir información respecto del Convenio al Presidente Municipal de Tatahuicapan, Veracruz, el C. Esteban Bautista Hernández, con la finalidad de que allegara de información y documentación a esta autoridad que le permitiera dilucidar la verdad de los hechos materia del presente procedimiento.

En ese sentido, mediante oficio número PRES/TATA/0176/2018, el Presidente Municipal de Tatahuicapan, Veracruz de Ignacio de la Llave, dio contestación al requerimiento que le fuera formulado, manifestando que la autoridad a su cargo no cuenta con información ni documentación alguna relacionada con la firma del Convenio ni de su negociación, negando, asimismo, que el Partido Morena haya recibido recursos del Gobierno del Estado de Veracruz durante la gestión del exgobernador Javier Duarte de Ochoa a cambio del suministro de agua a Coatzacoalcos, Veracruz.

Es preciso señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la información y documentación remitida por el Secretario de Gobierno del estado de Veracruz, la Comisión del Agua de dicha entidad, así como del Presidente Municipal de Tatahuicapan, constituyen documentales públicas con pleno valor probatorio, por lo que generan convicción respecto de los hechos con ellas relacionados.

En ese sentido, si bien la documentación e información obtenida de los sujetos entrevistados, así como del instituto político incoado en su respuesta, de conformidad con el artículo 21, numeral 3, del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en Materia de Fiscalización, constituyen documentales privadas, las mismas harán prueba plena siempre que a juicio de la autoridad generen convicción sobre la veracidad de los hechos alegados, al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente, las afirmaciones de las partes, la verdad conocida y el recto raciocinio de la relación que guardan entre sí.

Así, se destaca que el cúmulo documental probatorio del que se allegó la autoridad fiscalizadora con motivo de la instrucción del procedimiento cuya resolución nos ocupa, genera convicción en el ánimo de la autoridad respecto de la celebración de un Convenio entre el Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave con un grupo de personas de Tatahuicapan, Veracruz, con el fin de otorgarles \$2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) mensuales en dinero en efectivo durante dos años, a efecto de que los pobladores del Municipio de Tatahuicapan no impidieran el abasto de agua de la “Presa Yuribia” a Coatzacoalcos, Veracruz.

Lo anterior se encuentra plenamente acreditado merced a la información y documentación allegada derivada de los cuestionamientos realizados a los sujetos entrevistados, entre los cuales proporcionaron copia del multicitado Convenio, así como a aquella rendida por las autoridades municipales de Tatahuicapan y Coatzacoalcos; información y documentación que genera convicción respecto de la veracidad de los hechos materia de estudio del presente apartado, esto es, de la existencia del mencionado Convenio, así como de su objetivo y alcances.

**B. Supuesta entrega de recursos por parte del Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave a representantes ejidales, ejidatarios y pobladores de Tatahuicapan de Juárez.**

Una vez acreditada la existencia del Convenio antes referido, se estableció la necesidad de dirigir la línea de investigación a las consecuencias inmediatas de su celebración, esto es, la entrega de los recursos referidos en el cuerpo del mismo a los pobladores del municipio de Tatahuicapan.

Así las cosas, la autoridad substanciadora procedió a requerir información a los CC. Pascual Lorenzo Ruíz, Presidente del Comisariado Ejidal, Juan Sánchez Hernández, Presidente del Consejo de Vigilancia de la Cuenca del Río Texizapán, Felipe Hernández González, Secretario del Comité de Vigilancia de la Cuenca del Río Texizapán y Evaristo González Bautista, Tesorero del Comité de Vigilancia de la Cuenca del Río Texizapán; a efecto de allegarse de información relativa a la entrega de los recursos en comento, así como al destino que les fuera dado.

En ese sentido, y tal y como se desprende de las respuestas otorgadas por los sujetos cuestionados, mismas que fueron transcritas con anterioridad, en específico por los CC. Pascual Lorenzo Ruíz, Juan Sánchez Hernández y Evaristo González Bautista, manifiestan que sí tienen conocimiento de la celebración del Convenio y de sus términos, habiendo participado este último en su suscripción como Tesorero del Comité de Vigilancia de la Cuenca del Río Texizapán y, según lo manifestado por los CC. Pascual Lorenzo Ruíz y Juan Sánchez Hernández, como administrador de los recursos otorgados durante el desarrollo de las funciones de dicho encargo.

En ese sentido, se precisa que el encargado de administrar los recursos derivados del Convenio era el Comité de la Cuenca del Río Texizapán a través del C. Evaristo González Bautista; indicando que el Convenio fue negociado por representantes de vecinados y ejidatarios, sin haber participado ningún representante político,



**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/37/2017**

repartiéndose entre los primeros el recurso otorgado, lo que resulta coincidente en todas y cada una de las respuestas otorgadas por los sujetos entrevistados.

Es importante destacar que el C. Evaristo González Bautista fungió como administrador directo de los recursos otorgados con motivo del Convenio, por lo que como parte de la respuesta dada a las interrogantes planteadas, proporcionó documentación consistente en Informes de ingresos y egresos, cortes de caja, balances contables y recibos. Documentación comprobatoria que ilustra la utilización y destino dados a los recursos derivados del Convenio, esto es, a la construcción de un hospital, la siembra y reforestación del río, la entrega de diversos apoyos a los ejidatarios, así como la compra de equipo de sonido, cómputo y de oficina para el trabajo del Comité, gastos que fueron relacionados con la documentación comprobatoria adjunta por el sujeto entrevistado.

A continuación, se refieren algunos de los gastos señalados por el entrevistado en la documentación comprobatoria que adjuntó a su respuesta:

ID	CONCEPTO	FECHA	ABONOS	GASTOS
<b>Marzo</b>				
1	Convenio	07/03/2015	\$2,500,000.00	
2	Apoyo a ejidatarios (449)	07/03/2015		\$449,000.00
3	Apoyo a avecindados (4,182)	07, 08,14 y 15/03/2015		\$2,016,500.00
4	Gastos varios	Diversas		\$35,057.00
<b>Junio</b>				
5	Convenio	01/06/2015	\$2,500,000.00	
6	Apoyo a ejidatarios (460)	02/06/2015		\$460,000.00
7	Apoyo a avecindados (4,057)	06 y 07/06/2015		\$2,028,500.00
8	Gastos varios	Diversas		\$16,548.00
<b>Agosto</b>				
9	Convenio	01/08/2015	\$2,500,000.00	
10	Apoyo a ejidatarios (484)	04/08/2015		\$484,000.00
11	Apoyo a avecindados (4,032)	06, 07 y 08/08/2015		\$2,016,000.00
12	Gastos varios	Diversas		\$14,669.00
<b>Septiembre</b>				
13	Convenio	01/09/2015	\$2,500,000.00	
14	Apoyo a ejidatarios (463)	08/09/2015		\$463,000.00
15	Apoyo a avecindados (4,008)	10, 11 y 12/09/2015		\$2,004,000.00
16	Gastos varios	Diversas		\$28,337.00

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/37/2017**

<b>Octubre</b>				
17	Convenio	06/10/2015	\$2,500,000.00	
18	Apoyo a ejidatarios (478)	07/10/2015		\$478,000.00
19	Apoyo a avecindados (4,053)	08, 09 y 10/10/2015		\$2,026,500.00
20	Gastos varios	Diversas		\$8,197.00
<b>Noviembre</b>				
21	Convenio	01/11/2015	\$2,500,000.00	
22	Apoyo a ejidatarios (474)	06/11/2015		\$474,000.00
23	Apoyo a avecindados (3,980)	09, 10 y 11/11/2015		\$1,990,000.00
24	Gastos varios	Diversas		\$21,288.00
<b>Diciembre</b>				
25	Convenio	01/12/2015	\$2,500,000.00	
26	Apoyo a ejidatarios (482)	07/12/2015		\$482,000.00
27	Apoyo a avecindados (4,036)	08, 09 y 10/12/2015		\$2,018,000.00
28	Gastos varios	Diversas		\$14,506.00
<b>Enero</b>				
29	Convenio	30/12/2015	\$2,500,000.00	
30	Apoyo a ejidatarios (482)	30/12/2015		\$482,000.00
31	Apoyo a avecindados (3,978)	02, 03 y 04/01/2016		\$1,989,000.00
32	Gastos varios	Diversas		\$31,613.50

Es importante destacar que los sujetos requeridos fueron enfáticos en señalar que en la firma, celebración y administración de los recursos derivados del Convenio en comento, no participó ningún representante o miembro de partido político alguno, resultando coincidentes sus manifestaciones entre todos los individuos cuestionados. Por lo que se considera infundado.

**C. Posible vínculo de representantes ejidales, ejidatarios y pobladores de Tatahuicapan de Juárez y el Partido Morena y/o su entonces Presidente Nacional, el C. Andrés Manuel López Obrador.**

Visto lo anterior y toda vez que se acreditó la existencia del multicitado Convenio, la entrega de los recursos pactados en el mismo, así como el destino que los pobladores de Tatahuicapan dieron al mismo (apoyo económico a los ejidatarios y avecindados, así como diversos gastos generales), esta autoridad procedió a requerir información al Partido Morena respecto de los hechos materia de denuncia, en específico respecto de la celebración del Convenio en comento, su probable participación en la misma, así como su posible implicación en el destino dado a los

recursos otorgados con motivo de este, por lo que mediante oficio sin número de fecha tres de mayo de dos mil diecisiete, dicho instituto político rindió su contestación en los términos que se señalan a continuación:

- ✓ Manifiesta que ningún militante o miembro del partido participó en las negociaciones realizadas con motivo de la celebración del Convenio.
- ✓ Niega que hayan existido aportaciones a dicho instituto político provenientes de los posibles beneficiarios del Convenio.
- ✓ Refiere que las personas identificadas con anterioridad no son militantes de dicho instituto político.
- ✓ Niega la realización de los hechos denunciados.

De la contestación antes transcrita se desprende la negativa del instituto político incoado respecto de los hechos materia del presente procedimiento, negando que el mismo o alguno de sus militantes haya intervenido en la celebración del Convenio o que se haya beneficiado de forma alguna de los recursos emanados de su celebración.

Al respecto, es preciso señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación con el 21, numeral 3 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, las pruebas documentales privadas y testimoniales sólo harán prueba plena cuando a juicio de la autoridad generen convicción respecto de los hechos con ellas relacionados al concatenarse con los demás elementos que obren en el expediente.

A efecto de corroborar lo señalado por el Partido incoado, la autoridad fiscalizadora procedió a solicitar información al Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos, para que informara si los CC. Pascual Lorenzo Ruíz, Juan Sánchez Hernández, Inocente Bautista Luis, Felipe Hernández González, y Evaristo Gonzáles Bautista; son militantes de algún partido político, remitiendo la documentación que, en su caso, ampare dicha circunstancia.

Al respecto, mediante oficio INE/DEPPP/DE/DPPF/1326/2017 de fecha dieciocho de mayo de dos mil diecisiete, el Director Ejecutivo de Prerrogativas y Partidos Políticos dio contestación a lo solicitando, informando lo que se transcribe a continuación:

(...)

*Sobre el particular le informo que después de una exhaustiva búsqueda en los archivos a cargo de esta Dirección Ejecutiva sobre los **5 (cinco)** ciudadanos enlistados en el oficio de mérito, se encontraron **5 (cinco)** coincidencias en el padrón de militantes del Partido Político Nacional denominado MORENA, lo que se detalla en el cuadro siguiente, incluyendo clave de elector, apellido paterno, apellido materno, nombre (s) y entidad. Lo anterior, ya que al no tener certeza de que se trate de los mismos ciudadanos, se le proporcionan mayores datos de identificación para que esté en posibilidad de determinar si se trata de la misma persona.*

Apellido Paterno	Apellido Materno	Nombre	Estado
Hernández	González	Felipe	Tabasco
Sánchez	Hernández	Juan	Ciudad de México
Sánchez	Hernández	Juan	Ciudad de México
Sánchez	Hernández	Juan	Michoacán
Sánchez	Hernández	Juan	Oaxaca

De igual forma, se requirió información a la Dirección de Auditoría a efecto de que manifestara si las personas identificadas en los párrafos anteriores realizaron aportaciones a Partido Morena durante el ejercicio dos mil quince y, en su caso, adjuntara la información y documentación comprobatoria de dichas operaciones.

En ese sentido, el catorce de noviembre de dos mil diecisiete, mediante oficio INE/UTF/DA-L/1362/17, la Dirección de Auditoría atendió el requerimiento de información antes citado, señalando no tener registro de aportación alguna por ningún concepto que hubiera sido realizada por dichas personas en favor del Partido Morena.

En relación con lo anterior, resulta importante señalar que los sujetos cuestionados cuyos nombres fueron señalados con anterioridad no refieren como parte de sus contestaciones que la celebración del convenio o el destino de los recursos obtenidos con motivo de este hayan tenido como destino el financiar actividades del Partido Morena, no desprendiéndose de dichas respuestas vínculo alguno entre dicho instituto político y los hechos y personas referidos, circunstancias que se

corroboran en virtud de la información rendida por la Dirección de Auditoría y la Dirección de Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como de las razones y constancias emitidas por la autoridad fiscalizadora los días cuatro, seis y veinticinco de abril de dos mil diecisiete, merced a las cuales se advirtió que dichas personas no figuraban en los padrones de militantes del partido político incoado.

Es preciso señalar que conforme a lo dispuesto en el artículo 16, numeral 1, fracción I, en relación con el 21, numeral 2 del Reglamento de Procedimientos Sancionadores en materia de Fiscalización, la información y documentación remitida tanto como la Dirección de Auditoría, como por la Dirección de Ejecutiva de Prerrogativas y Partidos Políticos, así como aquella advertida por la autoridad fiscalizadora merced a las diversas razones y constancias emitidas, constituyen documentales públicas con pleno valor probatorio, por lo que generan convicción respecto de los hechos con ellas relacionados.

Así, derivado de las diligencias practicadas por la autoridad fiscalizadora a las diversas autoridades del Gobierno del estado de Veracruz, del Municipio de Tatahuicapan, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos, la Dirección de Auditoría del Instituto Nacional Electoral, así como de los diversos funcionarios del Comité de la Cuenca del Río Texizapán, se arribó a las siguientes conclusiones:

- ✓ La Presidencia Municipal de Tatahuicapan, Veracruz, reconoció la existencia de un Convenio celebrado entre el Gobierno de Veracruz y los habitantes del Municipio de Tatahuicapan, en específico por diversas autoridades ejidales de dicha demarcación, refiriendo que la autoridad a su cargo no tuvo participación alguna en la celebración del mismo y desconoce el destino de los recursos otorgados por este.
- ✓ La presidencia Municipal de Coatzacoalcos, Veracruz confirmó la existencia del Convenio y su objeto, señalando que dicha autoridad se mantuvo al margen de la firma y la administración de los recursos derivados del mismo, interviniendo únicamente en el restablecimiento del suministro de agua a dicha municipalidad.
- ✓ Los funcionarios del Comité de la Cuenca del Río Texizapán reconocieron la existencia del Convenio, las partes que intervinieron en este, así como la firma y la finalidad del mismo, esto es, el otorgamiento de recursos en

efectivo por parte del Gobierno de Veracruz, en específico del Secretario de Gobierno a los habitantes de Tatahuicapan con motivo de las afectaciones causadas por estos últimos al suministro de agua a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz.

- ✓ Los CC. Félix Hernández González, Presidente del Comité de la Cuenca del Río Texizapán y Calixto Cruz Martínez, Presidente del Comisariado Ejidal, proporcionaron como parte de sus contestaciones, copia simple del Convenio celebrado.
- ✓ Manifestaron que ningún militante o miembro del Partido Morena participó en las negociaciones realizadas con motivo de la celebración del Convenio ni en el manejo de los recursos otorgados con motivo de este.
- ✓ La Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos negó que los funcionarios ejidales involucrados en la firma y administración de los recursos del Convenio sean militantes del Partido Morena.
- ✓ Se realizaron diversas razones y constancias en las que se desprende que los ciudadanos que formaron parte del Comité de la Cuenca del Río Texizapán, así como de los ejidatarios de Tatahuicapan de Juárez no son militantes del partido Morena.

La Dirección de Auditoría, así como los propios funcionarios antes señalados, negaron que hayan existido aportaciones a dicho instituto político provenientes de los posibles beneficiarios del Convenio.

- ✓ La Comisión del Agua del estado de Veracruz y la Secretaría de Gobierno de dicha entidad, negaron la realización de los hechos denunciados, esto es, la suscripción de un Convenio entre el Gobierno del Estado y los pobladores de Tatahuicapan.

De lo anterior, se evidencia la celebración de un Convenio en el año dos mil catorce por parte del Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave con un grupo de personas de Tatahuicapan, Veracruz, con el fin de otorgarles \$2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) mensuales en dinero en efectivo durante dos

años, a efecto de que los pobladores del Municipio de Tatahuicapan no impidieran el abasto de agua de la “Presa Yuribia” a Coatzacoalcos, Veracruz; mismo con que cuenta esta autoridad en copia simple derivado de que fuera exhibido por diversos integrantes del Comité de la Cuenca del Río Texizapán.

Es importante destacar que del cúmulo probatorio antes señalado no fue posible acreditar que dichos recursos hayan sido utilizados para el financiamiento partidista del instituto político Morena como señala el quejoso, toda vez que de las manifestaciones vertidas por quienes participaron en la celebración del mencionado Convenio, así como de la información proporcionada por la Dirección de Auditoría, la Dirección de Prerrogativas y Partidos Políticos y el propio instituto político incoado, no fue posible identificar que los CC. Pascual Lorenzo Ruíz, Presidente del Comisariado Ejidal, Juan Sánchez Hernández, Presidente del Consejo de Vigilancia de la Cuenca del Río Texizapán, Evaristo Gonzáles Bautista, Tesorero del Comité de Vigilancia de la Cuenca del Río Texizapán, Calixto Cruz Martínez, Presidente del Comisariado Ejidal, Inocente Bautista Luis, Expresidente del Consejo de Vigilancia, Felipe Hernández González, Secretario del Comité de Vigilancia de la Cuenca del Río Texizapán e Isaías Landa Domínguez, Presidente del Consejo Vecinal y Félix Hernández González, Presidente del Comité de la Cuenca del Río Texizapán; sean militantes del Partido Morena o que los mismos hayan realizado aportaciones a dicho instituto político.

Así, si bien esta autoridad tuvo por acreditada la existencia del Convenio en comento, así como la entrega de los recursos derivados de este lo anterior es así, en virtud de que al concatenar todas las presunciones derivadas de los medios de prueba obtenidos por la autoridad fiscalizadora, se arribó a la conclusión de que los recursos otorgados con motivo de la firma del Convenio fueron administrados y erogados por los pobladores de Tatahuicapan en los rubros expresados en las entrevistas realizadas, esto es, mejora y equipamiento de un hospital, pavimentación de caminos, compra de equipos y apoyos en efectivo a los pobladores; situación que no pudo ser desmentida derivados de las diligencias realizadas dado que dichos recursos fueron entregados en efectivo.

Finalmente, es preciso citar el criterio orientador sostenido en diversas ocasiones por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, mismo que ha dado origen a la tesis de Jurisprudencia 12/2001.

*EXHAUSTIVIDAD EN LAS RESOLUCIONES. CÓMO SE CUMPLE. Este principio impone a los juzgadores, una vez constatada la satisfacción de los presupuestos procesales y de las condiciones de la acción, el deber de agotar cuidadosamente en la sentencia, todos y cada uno de los planteamientos hechos por las partes durante la integración de la litis, en apoyo de sus pretensiones; si se trata de una resolución de primera o única instancia se debe hacer pronunciamiento en las consideraciones sobre los hechos constitutivos de la causa petendi, y sobre el valor de los medios de prueba aportados o allegados legalmente al proceso, como base para resolver sobre las pretensiones, y si se trata de un medio impugnativo susceptible de abrir nueva instancia o juicio para revisar la resolución de primer o siguiente grado, es preciso el análisis de todos los argumentos y razonamientos constantes en los agravios o conceptos de violación y, en su caso, de las pruebas recibidas o recabadas en ese nuevo proceso impugnativo.*

De tal suerte que esta autoridad, realizó todas las posibles diligencias que le permitieran allegarse de los elementos mínimos idóneos para la comprobación de los hechos denunciados por el quejoso.

En virtud de lo anterior, y toda vez que no se acredita la utilización de los recursos derivado del Convenio en favor del Partido Morena lo procedente es declarar infundado el procedimiento que nos ocupa.

Con base en las consideraciones fácticas y normativas expuestas, es de concluir que no se acredita que el Partido Morena haya vulnerado lo dispuesto en los artículos 25 numeral 1, inciso i), relacionados con el 54 numeral 1 de la Ley General de Partidos Políticos; así como el artículo 121 del Reglamento de Fiscalización, derivado de lo cual el procedimiento de mérito, debe declararse **infundado**, respecto de los hechos materia del presente Considerando.

## **5. Vista al Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz.**

No obstante lo anterior, y toda vez que sí se tuvo por acreditada la celebración de un Convenio en el año dos mil catorce por parte del Gobierno de Veracruz de Ignacio de la Llave con un grupo de personas de Tatahuicapan, Veracruz, con el fin de otorgarles \$2,500,000.00 (Dos millones quinientos mil pesos 00/100 M.N.) en dinero en efectivo durante dos años, a efecto de que no se impidiera el abasto de agua de



la “Presa Yuribia” a la ciudad de Coatzacoalcos, Veracruz; y en atención a que esta autoridad tuvo por acreditada la entrega de dichos recursos por parte del gobierno estatal, se orden dar vista al Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz a efecto de que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda.

En consecuencia se da vista al Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz, con las constancias que integran el expediente en copia certificada, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo que en derecho corresponda.

**6.** Que de acuerdo a lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General de Sistema de Medios de Impugnación, en contra de la presente determinación es procedente el “recurso de apelación” el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal, debe interponerse dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**En atención a los Antecedentes y Considerandos vertidos, y en ejercicio de las atribuciones que le confieren a este Consejo General los artículos 35, numeral 1; 44, numeral 1, incisos j), y a) de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, se:**

## **R E S U E L V E**

**PRIMERO.** Se declara **infundado** el presente procedimiento administrativo sancionador de queja en materia de fiscalización instaurado en contra del Partido Morena en los términos del **Considerando 4** de la presente Resolución.

**SEGUNDO.** Vista al **Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz.** Se da vista al Órgano de Fiscalización Superior del estado de Veracruz, de conformidad con lo establecido en el **Considerando 5** de la presente Resolución, para que en el ámbito de sus atribuciones determine lo conducente.

**CONSEJO GENERAL**  
**INE/Q-COF-UTF/37/2017**

**TERCERO** En términos de lo dispuesto en el artículo 40 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación el recurso que procede en contra de la presente determinación es el denominado “recurso de apelación”, el cual según lo previsto en los numerales 8 y 9 del mismo ordenamiento legal se debe interponer dentro de los cuatro días contados a partir del día siguiente a aquél en que se tenga conocimiento del acto o resolución impugnado, o se hubiese notificado de conformidad con la ley aplicable, ante la autoridad señalada como responsable del acto o resolución impugnada.

**CUARTO.** En su oportunidad archívese el presente expediente como asunto total y definitivamente concluido.

La presente Resolución fue aprobada en lo general en sesión extraordinaria del Consejo General celebrada el 10 de abril de 2019, por diez votos a favor de los Consejeros Electorales, Licenciado Enrique Andrade González, Maestro Marco Antonio Baños Martínez, Doctora Adriana Margarita Favela Herrera, Doctor Ciro Murayama Rendón, Doctor Benito Nacif Hernández, Maestra Dania Paola Ravel Cuevas, Maestro Jaime Rivera Velázquez, Doctor José Roberto Ruiz Saldaña, Maestra Beatriz Claudia Zavala Pérez y del Consejero Presidente, Doctor Lorenzo Córdova Vianello, y un voto en contra de la Consejera Electoral, Licenciada Alejandra Pamela San Martín Ríos y Valles.

**EL CONSEJERO PRESIDENTE DEL  
CONSEJO GENERAL**

**EL SECRETARIO DEL  
CONSEJO GENERAL**

**DR. LORENZO CÓRDOVA  
VIANELLO**

**LIC. EDMUNDO JACOBO  
MOLINA**